



**Moisés**  
**Agudelo Ayala**  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

Señores

**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS.....(REPARTO)**

BUGA-VALLE

E.S.D.

**REFERENCIA:** DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA POR RESPONSABILIDAD MÉDICA.

**DEMANDANTE:** LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO, SOFIA NARANJO GONZALEZ Y STIVEN NARANJO GONZALEZ

**DEMANDADO:** COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A NIT 805000427-1, HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE NIT 891901158, FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA NIT 8913800541, CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI NIT 890301430.

**MOISES AGUDELO AYALA**, mayor de edad, abogado en ejercicio, identificado con la cédula de ciudadanía 16.361.528 de Tuluá (V), y portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 68.337 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad al poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido **LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO**, mayor de edad y domiciliada en el municipio de Tuluá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.728.506 de Tuluá, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad, señorita **SOFIA NARANJO GONZALEZ** con NUIP W8A0252724 y el joven **STIVEN NARANJO GONZALEZ** NUIP 1.117.027.560, conforme al poder adjunto, mediante el presente escrito instauró **DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA**, por falla en el servicio por responsabilidad médica, respecto de la enfermedad del señor **ELMER NARANJO VALENCIA** y su posterior fallecimiento en la fecha 02 de septiembre del 2019 en contra de: **COOMEVA ENTIDAD PROMOTOR DE SALUD S.A NIT 805000427-1, HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE NIT 891901158, FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA NIT 8913800541, CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS NIT 890301430**, de acuerdo a la ley 1564 de 2012 y las demás normas aplicables, para que, se hagan las declaraciones y condenas que más adelante se formulan, todo ello con base en los siguientes:

### HECHOS

**PRIMERO:** Mi procurada, la señora **LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO** es la esposa del fallecido señor **ELMER NARANJO VALENCIA (Q.E.P.D)**, la cual tiene 45 años de edad.



**SEGUNDO:** El núcleo familiar de la demandante está compuesto por:

- Elmer Naranjo Valencia, era su esposo y falleció por la culpa de la entidad demandada, como se probará en el curso del proceso.
- Sofia Naranjo González, hija del señor Elmer Naranjo Valencia, la cual tiene diez y ocho (18) años de edad.
- Stiven Naranjo González, hijo del señor Elmer Naranjo Valencia, el cual tiene ocho (8) años de edad.

**TERCERO:** El señor **ELMER NARANJO VALENCIA (Q.E.P.D)** ejerció hasta el año 2019 la profesión de Jornalero de Finca Agrícola y Bovina, la cual se desarrolló en la zona rural del municipio de San Pedro (Valle del Cauca), de lo cual lograba obtener como contraprestación la suma mensual de OCHOCIENTOS VEINTI OCHO MIL CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE (\$828.116), y era el sustento económico de su núcleo familiar, y la demandante era la ama de casa de la familia, lo que aún se mantiene.

**CUARTO:** El señor **ELMER NARANJO VALENCIA (Q.E.P.D)**, en vida estuvo afiliado a la entidad **COOMEVA EPS** en el régimen contributivo y en el momento de su fallecimiento, tenía cuarenta y tres (43) años de edad, y tenía con la señora demandante **LUZ MARINA GONZALEZ** 18 años de unión marital de hecho y 2 años de matrimonio, es decir fueron pareja durante veinte (20) años.

**QUINTO:** En la fecha 02 de mayo de 2018, la Fundación Hospital San José le realizo a Elmer Naranjo Valencia Ultrasonografía de tejidos blandos en las extremidades inferiores con transductor de 7 Mhz o más, en el cual luego de examinado los resultado por el medico Hugo Alexis Vacca Trujillo, encontró imágenes que sugieren crecimientos ganglioionares, que pierden morfología y tejido graso lo cuales dan una consistencia solida y presentan vascularidad central en modalidad Doppler color el mayor mide 32x29x34mm y volumen calculado de 17.1 cc.

**SEXTO:** En la fecha 28 de marzo de 2018, el señor Elmer Naranjo Valencia ingresa al Hospital San José de Buga, con cuadro de dos días de evolución consistente en dolor en región lumbar, que se irradia por miembro inferior derecho, quien hace 4 horas presenta episodio de lumbago intenso e incapacitante, el cual había sufrido anteriormente. Luego de realizarle radiografía en la columna lumbosacra, no le encuentran enfermedad alguna y lo dejan con control posterior de sus síntomas.

**SEPTIMO:** El 19 de mayo de 2018, Elmer Naranjo Valencia ingresa al Hospital San José de Buga por cuadro clínica de 8 horas de evolución por dolor en región inguinal izquierda EVA 9/10, refiere sensación de masa hace 1 año en dicha área, consultado



hoy por exacerbación del dolor, incapacitante, e inicia remisión a la Clínica Nuestra señora de los remedios de Cali.

**OCTAVO:** Elmer Naranjo Valencia ingresa a la Clínica Nuestra señora de los remedios de Cali en la fecha 16 de agosto de 2018, en donde luego de examinar su historia clínica y realizarle exámenes de rigor, encuentra en la humanidad de Elmer, conglomerado ganglionar 97x90x64 mm inguinal izquierdo, con cambios necróticos, demás quistes renales de aspecto, con cambios espondilósicos lumbares en múltiples localizaciones, con hipertrofia heterogénea psorotrica, múltiples adenomegalias en cadera pélvica izquierda y en región inguinal izquierda con cambios necróticos, diverticulosis en hemicolon izquierdo e inician tratamiento médico.

**NOVENO:** Elmer ingresa al Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá el 19 de septiembre de 2018, debido a que luego de que le hicieran biopsia del área afectada ya enunciada, se le inflamó la pierna izquierda, lo cual obliga al Hospital a realizar pruebas diagnósticas y plan de tratamiento plasmado en la historia clínica del 19 de septiembre de 2018, en la cual ordena cirugía vascular y angiología.

**DECIMO:** Debido a la gravedad de su enfermedad y producto de la omisión de la entidad COOMEVA EPS para autorizar la cirugía y proteger sus derechos fundamentales, Elmer Naranjo Valencia interpuso acción de tutela en contra de COOMEVA EPS S.A el 10 de octubre de 2018.

**DECIMO PRIMERO:** En la fecha 18 de octubre de 2018, Elmer contrata con medico particular Jaboco Perez MD, el cual a través de atención encuentra gran masa firme de 15x10 cm con área que protruye ulcerada, hay severo edema del miembro inferior izquierdo y realiza pruebas, donde encuentra cáncer escamocelular y se remite a oncología clínica.

**DECIMO SEGUNDO:** El 16 de octubre de 2018, el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Tuluá remite el conocimiento del amparo constitucional al juzgado promiscuo municipal de San Pedro.

**DECIMO TERCERO:** El juzgado primero promiscuo de San Pedro falla la tutela a través de la sentencia No. 119 del 01 de noviembre de 2018, en la cual ordena amparar los derechos fundamentales a la salud y vida digna de Elmer Naranjo Valencia, por ser vulnerados por COOMEVA EPS S.A. y da órdenes directas a esta y a la entidad Clínica nuestra señora de los Remedios de Cali.



**DECIMO CUARTO:** En la fecha 10 de noviembre de 2020 a través de consultorio independiente, encuentran en el cuerpo de Elmer "Tumor Maligno de los Ganglios Linfáticos de la región inguinal y del miembro interior, confirmado repetido".

**DECIMO QUINTO:** Desde el 27 de noviembre de 2018 de hasta el 19 de marzo de 2019, los médicos tratantes del señor Elmer solicitaron una serie de servicios médicos entre los cuales, los más importantes eran Poliquimioterapia de alto riesgo, el cual no fue autorizado en el tiempo prudencial por la entidad demandada COOMEVA EPS S.A.

**DECIMO SEXTO:** El 04 de marzo de 2019, el señor Elmer Naranjo Valencia interpone incidente de desacato contra COOMEVA EPS, por no cumplir con la sentencia de tutela que es sencillamente darle el tratamiento médico ordenado por los médicos especialistas del ramo de oncología.

**DECIMO SEPTIMO:** El 15 de abril de 2019 el señor Elmer Naranjo Valencia entro por enfermedad al Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá, por tener cuadro clínico de 2 horas de evolución consistente en pics febriles, múltiples episodios eméticos, con lesión indurada, con secreción purulenta en región inguinal izquierda, dx de carcinoma de celular escamosas, refiere malestar general, por lo cual el Hospital le da el tratamiento del caso.

**DECIMO OCTAVO:** El 23 de abril de 2019 la médica Mirian Caicedo Arias, especialista en Oncología ordena autorizar entre otros servicios Poliquimioterapia de Alto Riesgo (Ciclo de Tratamiento) (POS), con el fin de darle tratamiento de Tumor Maligno de los Ganglios Linfáticos de la Pelvis al señor Elmer Naranjo Valencia.

**DECIMO NOVENO:** El día 15 de mayo de 2019 nuevamente la médica Mirian Caicedo Arias, especialista en Oncología, ordena autorizar, entre otros servicios, Poliquimioterapia de alto riesgo, curación de lesión en piel o tejido celular subcutáneo SOD.

**VIGÉSIMO:** El día 29 de mayo de 2019, el señor Elmer Naranjo Valencia, es ingresado al Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe de Tuluá llevado por personal de ambulancia quienes refieren paciente con antecedente de CA escamocelular en región inguinal izquierda mientras se encontraba en quimioterapia con carboplatino presenta rash eritematoso generalizado además de dificultad respiratoria edema de lengua y labios, se le da manejo médico de rigor.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** el 08 de julio de 2019, el señor Elmer Naranjo Valencia, interpone acción de tutela contra COOMEVA EPS, ya que no le ha suministrado los medicamentos, ni autorizado citas con especialista, tampoco los exámenes



diagnósticos de rigor, y mediante sentencia de tutela No. 189 del 18 de julio de 2019 ordena a COOMEVA:

**"(...) SEGUNDO: ORDENAR a COOMEVA E.P.S. a través de su representante legal o quien haga sus veces que, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si aún no lo hubiere hecho, autorice y logre la prestación efectiva de los siguientes servicios de salud: (1) Consulta de control o de seguimiento por especialista en oncología. (2) Poliquimioterapia de alto riesgo (ciclo tratamiento). (3) Consulta por primera vez por nutrición y dietética. (4) HEMOGRAMA IV AUTOMATIZADO. (5) CREATINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS. (6) Consulta por primera vez por medicina especializada - cirugía oncológica**

*En adelante debe lograr la realización efectiva, de manera pronta y oportuna, sin escollo administrativo alguno, de todos los servicios de salud que requiera el señor ELMER NARANJO VALENCIA con relación a la patología que padece: TUMOR MALIGNO DE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS DE PELVIS. Para lo cual, de ser necesario debe intervenir las E.P.S que pertenezcan a su red de prestadores de servicios (...)"*

El cual impugna pues le desconoce su necesidad de transporte especial por su grave situación de salud que le impide transportarse a través de servicio público de transporte (buses) lo cual el juzgado en sede tutela *a quem* decidió ordenar a COOMEVA EPS la autorización de transporte redondo a Elmer Naranjo Valencia, mediante sentencia No. 222 del 02 de agosto de 2019.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** A su vez, en la fecha 12 de junio de 2019, el señor Elmer Naranjo Valencia, a través de examen con especialista en Oncología, le ordenan entre otros, participación en junta médica, por medicina especializada y caso, poliquimioterapia de alto riesgo; (ciclo de tratamiento); consulta por primera vez por especialista en cirugía oncológica; consulta por primera vez por especialista en radioterapia, etc. y su situación continuó empeorando.

**VIGÉSIMO TERCERO:** El señor Elmer Naranjo Valencia ingresa el 05 de agosto de 2019, con el objeto de que le realizaran quimioterapia ingresa al Hospital Tomas Uribe Uribe, sin embargo, no pueden hacerle esta, debido a hemorragia con HB de 7,9, y le dan tratamiento médico, pero su evolución es preocupante, la sintomatología expresada en la historia clínica es muy preocupante, en cuanto no es posible seguir con las quimioterapias debido a que presenta hemorragias en la zona afectada y anemia. Requiere transfusión de sangre.

**VIGÉSIMO CUARTO:** En la fecha 08 de agosto de 2019 el señor Elmer Naranjo Valencia presenta derecho de petición ante la entidad COOMEVA EPS solicitando autorización de cirugía de extracción de tumor cancerígeno, a su vez presento queja





ante la personería municipal de Tuluá en contra de COOMEVA EPS por lo demora en la prestación de salud por falta de oportunidad.

Además, el 15 de agosto de 2019, el señor Elmer Naranjo Valencia interpone incidente de desacato por no cumplir la sentencia de tutela No. 189 del 18 de julio de 2019, por no cumplir lo ordenado en esta.

**VIGÉSIMO QUINTO:** En la fecha 02 de septiembre de 2019 a las 3:19:15 de la madrugada, el señor Elmer Naranjo Valencia ingresa al Hospital Tomas Uribe Uribe de Tuluá, por urgencias en ambulancia por cuadro de 1 hora de evolución con sangrado profuso de forma espontánea, por área de tumor, dolor intenso, es auxiliado por personal de ambulancia quien indica psicocode durante el traslado, donde le dan atención primaria y lo envían a la UCI, a la sala de reanimación, finalmente a las 6:38:49 fallece.

**VIGÉSIMO SEXTO:** El señor ELMER NARANJO compartía tiempo de esparcimiento con su familia, le gustaba ir de paseo y demás actividades de integración familiar con su esposa y sus hijos,

**VIGESIMO SEPTIMO:** La muerte del señor Elmer Naranjo Valencia le ha provocado daños y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a su esposa señora Luz Marina González y sus hijos Sofia Naranjo González y Stiven Naranjo González, que deben ser indemnizados integralmente, de la siguiente manera:

**A favor de LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergent e consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$8.291.544.	\$29.250.195	\$203.287.665	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$422.534.604</b>



**A favor de SOFIA NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergent e consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**A favor de STIVEN NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergent e consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**GRAN TOTAL ..... \$ 785.945.004**

**VIGÉSIMO SEPTIMO:** La señora Luz Marina González, producto de la omisión de COOMEVA EPS para darle tramite al tratamiento médico de su esposo señor Elmer Naranjo Valencia, tuvo que incurrir en los siguientes gastos:

- \$120.000 por consulta vascular con el especialista Jhon Jairo Berrio Caicedo el 17 de octubre de 2018.
- \$170.000 por consulta con el especialista Jacobo Pérez MD, el 19 de octubre de 2018.





- \$897.225 por concepto de Imagenología Radiología, descargo de medicamentos en la Clínica San Francisco de Tuluá el 23 de octubre de 2018, factura FS245915.
- \$900.000 por concepto de cirugía de biopsia con el medico Jacobo Pérez y clínica san Francisco el 24 de octubre de 2018.
- \$140.000 por realización de POX con el medico Harold Cuello B. el 26 de octubre de 2018, factura 87526.
- \$80.000 en MCA consultorios por concepto de PREVISER oncología 1 vez el 11 de octubre de 2018.
- \$500.000 por concepto de atención medica del médico Harold Cuello B. el 07 de noviembre de 2018, factura 87644.
- \$220.000 por pago de gamagrafia ósea total en Gamarafias del Valle Ltda., el 16 de noviembre de 2018, recibo de caja 17324.
- \$45.000 pago ultrasonografía testicular con análisis Doppler en A Sánchez Radiólogos S.A.S. de fecha 14 de diciembre de 2018, factura de venta ST 98656.
- \$260.000 por colonoscopia total del 11 de diciembre de 2018 de la médica Caridad Mona Fuentes, recibo de caja 41793.
- \$2.000 por impresión ecografía en A Sánchez Radiólogos S.A.S. de fecha 14 de diciembre de 2018, factura de venta ST 98657.
- \$107.000 por ecografía Doppler de vasos venosos de miembro inferior en la entidad A Sánchez Radiólogos S.A.S. de fecha 03 de mayo de 2019, factura de venta ST 106035.
- \$2.500 por impresión ecografía en la entidad A Sánchez Radiólogos S.A.S. de fecha 03 de mayo de 2019, factura de venta ST 106036.
- \$65.000 por previser oncología control en MCA consultorios el 13 de mayo de 2019.
- \$180.000 por consulta con especialista en la clínica del médico Jacobo Pérez MD, el 31 de mayo de 2019.
- \$3.395.800 por tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en la clínica Imbanaco el 27 de mayo de 2019, factura de venta MN152757.
- \$167.425 por compra de ERITROMICINA 500G; ESOMEPRAZOL 40 MG; LOPERAMIDA 2 MG; ENTOROGERMINA; KROMICIN 500G. el 13 de octubre de 2018, factura de venta 4572 304489.
- \$14.600 por compra de METFORMINA 850 MG el 26 de octubre de 2018, factura de venta 4571 2242244.
- \$43.000 por compra de DOXU 5/250 MG el 26 de octubre de 2018. Factura de venta 559034.
- \$51.500 por compra de DOXU PLUS 10/250 el 21 de noviembre de 2018, factura de venta 1075885.





- \$51.372 por compra de DOXU PLUS 10/250, el 13 de noviembre de 2018, factura de venta 4641 1074371.
- \$47.000 por compra de DOXU PLUS 10/250 MG, el 21 de mayo del 2019, factura de venta 629282.
- \$53.872 por compra de DOXU PLUS 10/250, KRODEX F COMPUESTO, el 08 de noviembre de 2018, factura de venta 4641 1073413.
- \$51.500 por compra de DOXU PLUS 10/250, el 02 de noviembre de 2018, factura de venta 4571 2242807.
- \$57.650 por compra de DOXU PLUS 10/250 MG con servicio de domicilio, el 29 de abril de 2019, factura de venta No. 4541 1107310.
- \$7.200 por compra de Gasa 1 x 5 el 17 de abril de 2019, ticket de venta 79-138112.
- \$3.550 por compra de Gasa 3 x 3 el 18 de octubre de 2018, ticket de venta 250-216498.
- \$26.400 por compra de MICROPORE BLANCO 3 PULGADAS, GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3, el 20 de diciembre de 2018, factura de venta L11974CC.
- \$72.550 por compra de GASA 1/2 2X2050, NULYTELY C, el 05 de diciembre de 2018, ticket de venta 168-250485.
- \$6.700 GASA 3X3 en la fecha 28 de octubre de 2018, ticket de venta No. 251-130941.
- \$23.000 por compra de GASA 1 X 5, ESPARADRAPO LEUKOPLAST 3 X5 en la fecha 16 de octubre de 2018, ticket de venta No. 251-130332.
- \$22.200 por compra de MICROPORE BLANCO 3 PULG, GASA ESTERIL NO TEJIDA 3X3X5, el 17 de abril de 2019, factura de venta L 13624 CC.
- \$7.500 por compra de PROPANOLOL 40 MG 20 el 25 de mayo de 2019, factura de venta 630637.
- \$500.000, con valor del transporte público que tuvo que pagar a lo largo de la atención médica.

**Total ..... \$8.291.544.**

Al tenerse como demandada una entidad social del estado, por fuero de atracción, esta demanda debe ser conocida por la jurisdicción contenciosa administrativa, además porque esta entidad presto en buena parte del tratamiento médico y allí falleció.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Se realizo ante la Procuraduría General de la Nación Audiencia de Conciliación el día 25 de Octubre de 2021 a las 02:10 pm, la cual se declaro fallida.



Con Fundamento en los hechos ya narrados y en sentencia que constituya cosa juzgada, solicito al Despacho, que se hagan las siguientes o similares:

### **PRETENSIONES**

**PRIMERA:** Declarar, como consecuencia de los hechos ya narrados, solidaria y administrativamente responsables; a **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a los demandantes, LUZ MARINA GONZALEZ, SOFIA NARANJO GONZALEZ Y STIVEN NARANJO GONZALEZ por RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

**SEGUNDO:** Condenar, en consecuencia, de la anterior declaración, solidariamente a: **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430, a pagar a LUZ MARINA GONZALEZ, por concepto de perjuicios materiales los cuales se estiman en cuantía equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$240.829.404).

**TERCERO:** Condenar en consecuencia de la anterior declaración, solidariamente a: **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. a pagar a Luz Marina González, por concepto de perjuicios morales y a la vida de relación los cuales estimo en cuantía equivalente a CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$181.705.200).

**CUARTO:** Condenar en consecuencia de la anterior declaración, solidariamente a: **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. a pagar a Sofia Naranjo Gonzalez, por concepto de perjuicios morales y a la vida de relación los cuales estimo en cuantía equivalente a CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$181.705.200).





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

**QUINTO:** Condenar en consecuencia de la anterior declaración, solidariamente a: **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. a pagar a Stiven Naranjo Gonzalez, por concepto de perjuicios morales y a la vida de relación los cuales estimo en cuantía equivalente a CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$181.705.200).

**SEXTO:** Condenar, solidariamente a: a **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. pagar las costas procesales.

### RESUMEN DE LAS PRETENSIONES

**QUINTO:** RESUMEN DE LAS PRETENSIONES: Condenar en consecuencia de la anterior declaración a **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891901158, **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430. a pagar a mi procurada, las siguientes sumas de dinero:

**A favor de LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergente consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$8.291.544.	\$29.250.195	\$203.287.665	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$422.534.604</b>



**A favor de SOFIA NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergent e consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**A favor de STIVEN NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergent e consolidado	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**GRAN TOTAL ..... \$ 785.945.004**

Al respecto es menester aclarar que el artículo 1613 y 1616 del código civil, permite la procedencia de la reparación de todos los perjuicios. De otra manera los artículos 2341 y 2356 del mismo código ordenan la reparación integral de todos los daños en el terreno de la responsabilidad extracontractual, sin excluir el perjuicio moral, sin hacer distinción alguna. Bien es sabido que cuando la Ley no distingue, no le dado al interprete distinguir.

**LUCRO CESANTE CONSOLIDADO O PASADO Y FUTURO**

La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, art. 1613 y 1614 del C.C.

$$S = \frac{Ra \times IPC \text{ final}}{IPC \text{ inicial}}$$





Donde  $S$  es la suma actualizada,  $Ra$  es el monto a indexar, IPC final corresponde al índice de precios al consumidor para el mes de abril de 2020, e IPC inicial es el índice de precios al consumidor del mes y año en que ocurrió el hecho de la víctima (...).

El lucro cesante pasado o consolidado es aquel capital que se dejó de obtener por la víctima directa desde la época del accidente hasta la fecha de liquidación de la presente providencia, recursos que habrían servido de sustento para quienes dependían económicamente de él. Para el efecto, se utilizarán las fórmulas aplicadas por esta Corporación y el Consejo de Estado:

$$S = Ra \times \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde,  $S$  es la suma de indemnización debida,  $i$  es la tasa de interés puro mensual,  $n$  es el número de meses que comprende el periodo a indemnizar y  $1$  es una constante matemática.

La tasa de interés parte del límite legal del 6% anual de acuerdo al artículo 2232 del Código Civil, convertido financieramente a mensuales así:

$$\begin{aligned} i &= (1+ip)^n - 1 \\ i &= (1+0.06)^{1/12} - 1 \\ i &= 0.004867 \end{aligned}$$

El monto del lucro cesante futuro, esto es el peculio que la víctima dejó de percibir contado desde el momento de la presente liquidación, se obtendrá utilizando las fórmulas que reiteradamente ha empleado la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Consejo de Estado así:

$$S = R \times \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

Donde,  $S$  es el valor que ha de pagarse como anticipo de los perjuicios futuros,  $R$  es el ingreso o salario actualizado,  $i$  el interés legal puro o técnico mensual (0,004867) y  $n$  el número de meses a liquidar.

Ahora, el número de meses para liquidar con relación al lucro cesante futuro, debe partir del límite de vida máximo más bajo entre la víctima directa y quien demuestre dependencia económica frente a ella, lo que se verificará en cada caso mediante las Tablas Colombianas de Mortalidad aprobadas por la Superintendencia Financiera”.





**Moisés**  
**Agudelo Ayala**  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

Una vez expuesto lo anterior, materializo la formula, teniendo en cuenta los siguientes valores.

### **1.- LUCRO CESANTE CONSOLIDADO O PASADO**

**Ra** = Renta actualizada a establecer.

**Rh** = Renta histórica \$828.116,00 que es el valor del salario que ganaba para la época en que falleció.

**IPC (final)** = Es el índice de precios al consumidor al momento de la liquidación, es decir 110,04 que es el correspondiente a septiembre del año 2021.

**IPC (inicial)** = Es el índice de precios al consumidor en el momento que se causa el daño, es decir 103,26 que es el que correspondió a septiembre del año 2019.

#### **Actualización de renta**

Sumando al Ra el 25% correspondientes a las prestaciones.

$$\$828.116 + \$207.029 = \mathbf{\$1.035.145.}$$

$$Ra = Rh \times \frac{\text{IPC Final (Fecha de liquidación)}}{\text{IPC Inicial (Fecha de erogación)}}$$

$$Ra = Rh \times \frac{110,04 \text{ IPC OCTUBRE DE 2021}}{103,26 \text{ IPC SEPTIEMBRE DE 2019}} =$$

$$Ra = \$1.103.112$$

#### **Calculo lucro cesante consolidado o pasado**





$$S = Ra \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

$$S = Ra \frac{(1+0,004867)^{25} - 1}{0,004867} = \frac{(1,004867)^{25} - 1}{0,004867} = \frac{1,1290537145 - 1}{0,004867}$$

$$= \frac{0,1290537145}{0,004867} = 26,5160703718 .$$

$$S = \$1.103.112 \times 26,5160703718 . = \mathbf{\$29.250.195.}$$

El lucro cesante consolidado o pasado equivale a \$29.250.195 en consecuencia este es el valor por concepto de lucro cesante presente para el Elmer Naranjo Valencia.

### **Lucro cesante futuro**

Se toma como base la totalidad del salario mínimo legal mensual vigente al momento de liquidar el lucro cesante futuro.

De acuerdo a la resolución 1555 de 2010 Superintendencia Financiera a la fecha de ocurrencia del fallecimiento del señor Elmer Naranjo Valencia quien tenía la edad de 42 años, así es que su expectativa de vida era de 39,0 años.

$$S = Ra \times \frac{(1+i)^n}{i(1+i)^n}$$

$$N = 468 \text{ meses.}$$

$$S = \$1.103.112 \times \frac{(1+0,004867)^{468} - 1}{0,004867 (1+0,004867)^{468}} =$$

$$S = \$1.103.112 \times \frac{(1,004867)^{468} - 1}{0,004867 (1,004867)^{468}} =$$

$$S = \$1.103.112 \times \frac{9,7010196671 - 1}{0,004867 (9,7010196671)} =$$

$$S = \$1.103.112 \times \frac{8,7010196671}{0,0472148627} =$$





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

$S = \$ 1.103.112 \times 184,2856077414 = \$203.287.665.$

## FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

### ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRA CONTRACTUAL EN SERVICIOS MEDICOS.

El código civil colombiano en sus normas, consagra el régimen legal de la responsabilidad médica:

Artículo 2341 C.C.:

**"RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL.** *El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido".*

La culpa de la entidad demandada COOMEVA EPS salta a la vista, y con los medios de prueba que se anexan y, se solicita, se decreten y practiquen, tendrá certeza de que los hechos que se enuncian en esta demanda son ciertos y que la entidad demandada actuó de forma tardía y negligente, lo que ocasiono la perdida de oportunidad en darle atención medica oportuna y de calidad al señor Elmer Naranjo Valencia acorde a sus necesidades, a las que tenia derecho.

Artículo 2343 C.C.:

**"PERSONAS OBLIGADAS A INDEMNIZAR.** *Es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos.*

*El que recibe provecho del dolo ajeno, sin haber tenido parte en él, solo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho que hubiere reportado".*

Según esta regla, para que el juez civil ordene una indemnización por la muerte de Elmer Naranjo Valencia, se debe probar que existe un daño, (la muerte de Elmer Naranjo Valencia), y que esta es responsabilidad del demandado (COOMEVA EPS), debido al actuar doloso o culposo de esta, lo que se probara en este proceso judicial, ya que la atención ofrecida por el personal administrativo de COOMEVA EPS, fue tan negligente, que la demandante tuvo que rogar ante el juez constitucional, que le ordenara al demandado, cumpliera con autorizar los tratamientos médicos e incluso tuvo que accionar el incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela, es más, tuvo que tutelar dos veces para intentar que la entidad demandada le





brindara las autorizaciones del caso para concretar el tratamiento ordenado por los médicos tratantes.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia SC 13925-2016 con Radicación #05001-31-03-003-2005-00174-01, M.P. ARIEL SALAZAR RAMÍREZ establece:

**"Elementos de la responsabilidad civil"**

*Los requisitos que la ley exige para que el perjuicio que sufre una persona pase a ser responsabilidad de otra son: la presencia de un daño jurídicamente relevante; que éste sea normativamente atribuible al agente a quien se demanda la reparación; y que la conducta generadora del daño sea jurídicamente reprochable (en los casos de responsabilidad común por los delitos y las culpas)".*

El daño del demandante, consiste en la muerte de su querido esposo, señor Elmer Naranjo Valencia lo que le produjo daños patrimoniales y extrapatrimoniales a la demandante y su núcleo familiar, ya que Elmer desde el año 2018 padecía de cáncer de piel escamoso

En cuanto a la acción u omisión del agente o demandado se establece:

La doctrina ha establecido respecto de la responsabilidad médica que:

**"LA CULPA MÉDICA"**

*la conducta activa u omisiva del profesional médico o paramédico y la actuación administrativa o asistencial, se constituyen en uno de los elementos esenciales de la responsabilidad por la prestación de servicios de salud. Su denominación como hecho, hecho culposo, conducta, falla, falta, acto o acción, puede significarse con el calificativo de culpa médica, que comprende los demás términos y resulta adecuada para los fines de este estudio. Utilizaremos, por tanto, la denominación de culpa médica, la cual comprende diversos aspectos, como son sus modalidades, apreciación y en especial su prueba, razón por la cual nos referimos a su evolución, tanto legal como doctrinaria y jurisprudencial.*

**1. MODALIDADES DE LA CULPA**

*No podemos obviar en el presente trabajo, la referencia a la clasificación doctrinaria sobre los diferentes tipos de culpa, los cuales adquieren precisa aplicación en la responsabilidad por la prestación de servicios de salud, especialmente en cuanto al análisis del acto médico, a saber, la impericia, la imprudencia, la negligencia y la violación de reglamentos. Sin embargo, y dadas las características del sistema de seguridad social con los planes de salud, las decisiones administrativas y los servicios institucionales, consideramos importante complementar las modalidades de culpa con otras acciones u omisiones, que denominamos **faltas de gestión, coordinación o administración** (Subrayado y negrillas fuera de texto).*





### **1.1. Impericia**

Se define como la falta de pericia o habilidad en una ciencia o arte. Aplicado al campo de los servicios de salud, consiste en la falta de conocimientos o capacidad profesional para realizar un acto médico. Sobre esta modalidad de culpa, la jurisprudencia ha dicho que "... la impericia médica es la falta -total o parcial- de pericia, entendiendo por esta la sabiduría, conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la medicina<sup>1</sup>. Al médico general que efectúa un procedimiento de gran complejidad, como una neurocirugía, y comete un error por desconocimiento o inexperiencia, se le catalogaría como imperito.

### **1.2. Imprudencia**

Consiste en la falta de templanza, cautela, prudencia y buen juicio. Existe cuando se somete a un paciente a un riesgo injustificado que no corresponda a sus condiciones clínico-patológicas. Según la jurisprudencia, "...la imprudencia es la falta de prudencia; realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas precauciones, la prudencia debe ser una de las virtudes médicas, pues es esencial que el médico ejerza su profesión con cordura, moderación, cautela, discreción y cuidado"<sup>2</sup> Se presentaría cuando el médico, sin contar con el instrumental, los elementos médicos o la infraestructura adecuadas, efectúa un procedimiento sin poder manejar acertadamente una complicación. No habría responsabilidad cuando el médico, buscando preservar la vida o la integridad de un paciente, trata de ayudarlo sin contar con los medios disponibles en un evento de urgencia.

### **1.3. Negligencia**

Es un descuido, o falta de cuidado, o una omisión, como cuando no se emplean medios conocidos y disponibles en la prestación de un servicio de salud. Si el profesional, no acatando medidas de cuidado, higiene o seguridad que tiene a su disposición, atenta contra la salud del paciente, estaría actuando de manera negligente; igualmente, si el profesional no revisa la historia clínica, las instrucciones de un equipo, las indicaciones de otro colega, las contraindicaciones de un tratamiento, la anormalidad evidente del instrumental o la fecha de vencimiento de unos medicamentos.

### **1.4. Violación de reglamentos**

Está constituida por la infracción de los principios científicos y las normas legales. Además de ello, en el campo médico, se daría cuando el profesional se aparta de la *lex artis*, en la realización de una técnica o un procedimiento. Abarcaría además la violación de normas legales que consagran reglas precisas y de obligatorio cumplimiento, así como normas de ética médica, estudios profesionales y escuelas científicas. Se plantean además discusiones sobre los protocolos institucionales y la ciencia basada en la evidencia, para lo cual retoma importancia el principio de la

<sup>1</sup> AR. CNCiv., Sala G, 7-4 1983.

<sup>2</sup> AR. CNCiv., Sala G, 7-4 1983.



*libertad terapéutica con sustento científico y precedido de consentimiento informado (...)*<sup>3</sup>.

## **NEXO DE CAUSALIDAD**

La entidad demandada COOMEVA EPS incurrió en negligencia total a la hora de darle trámite a las ordenes medicas que se debían autorizar con la mayor rapidez posible, y sin embargo fueron ignoradas, o se tramitaron a la velocidad de una tortuga en algunos casos, y en otros con una velocidad de una roca, es decir, velocidad cero, ignoraron las ordenes médicas y no le dieron trámite, por ello la demandante y su pareja se vieron en la necesidad de contratar los servicios particulares de médicos especializados en la materia además la demandante tuvo que ejercer su derecho fundamental a interponer tutelas y descatos en un intento de hacer que COOMEVA EPS cumpliera con sus funciones.

En cuanto al nexo de causalidad, este se edifica con la comprobación de los hechos, estos son:

1. Que el señor Elmer Naranjo Valencia sufrió desde el año 2018 enfermedad ruinosa tipo cáncer de piel, debidamente diagnosticada y con ordenes claras de los médicos tratantes.
2. Que la entidad COOMEVA EPS con su actuar negligente convirtió un tratamiento medico que debía durar pocos meses, en dos (2) años de graves y dolorosos padecimientos en la humanidad de Elmer Naranjo Valencia y su posterior muerte.
3. La perdida de oportunidad de darle al señor Elmer Naranjo Valencia un tratamiento oportuno y adecuado es responsabilidad directa de COOMEVA EPS, la cual se tardo un tiempo excesivo en autorizar las ordenes médicas, y en otras ocasiones sencillamente ignoro las órdenes médicas.

Es decir, si el demandado no hubiera sido negligente en su actuar, Elmer Naranjo Valencia aún estaría con vida o en el desenlace de la misma hubiere sido menos traumático, menos doloroso, menos sufrido.

El actuar de la entidad de salud del fallecido es inadecuado e impertinente, debido a las dilaciones injustificadas, en las autorizaciones de procedimientos diagnósticos, terapéuticos, entre otros generaron perdida de tiempo importante para poder recuperar la salud del paciente.

---

<sup>3</sup> YEPES RESTREPO, Sergio. La Responsabilidad Civil Médica. 9 edición 2016. Editorial Biblioteca Jurídica DIKE. Pág. 81-83.





Tanto es así, que vemos en las atenciones del paciente solicitudes para valoración por médicos especialistas, como oncología, cirugía oncológica, las cuales demoraron largos periodos de tiempo, incluso meses para que fuesen autorizadas. Esto sin contar que posterior a estas valoraciones especializadas, se generaron ordenes de tratamientos como poliquimioterapias, solicitud de cirugías, que al igual que las anteriores también sufrieron demoras injustificadas de meses, e incluso algunas de estas nunca se llegase a autorizar.

Esto obviamente va en contra de la posibilidad de tratamiento del paciente, ya que como hemos analizado, se trataba de una complicación neoplásica de rápido crecimiento, que se hubiese visto beneficiado con la celeridad del tratamiento, ya sea para evitar el crecimiento descontrolado de esta y el surgimiento de complicaciones como sangrados, compresiones, etc. O si se hubiese autorizado oportunamente las valoraciones por cirugía oncológica y una vez efectuada esta la orden de cirugía, se podría haber erradicado o al menos controlado el crecimiento de la lesión.

Es decir que el actuar omisivo por parte de la entidad promotora de salud Coomeva EPS, al poner trabas en las autorizaciones de valoraciones y procedimientos, trunco la posibilidad de erradicación de enfermedad, o al menos de control de su crecimiento, lo cual llevo el cuadro del paciente, a presentar una complicación esperable para una masa inguinal expuesta y es el sangrado, lo cual finalmente condujo a su fallecimiento por choque hipovolémico.

Como bien se ha expresado, el demandado es persona jurídica de naturaleza privada, por ello y desde la óptica del Código Civil, se puede aplicar a la indemnización de perjuicios por incumplimiento de las obligaciones los siguientes artículos:

#### **Artículo 1494 Código Civil:**

*"Fuente de las Obligaciones. Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contrato o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia".*

La entidad demandada tenía un contrato, con el señor Elmer Naranjo Valencia, la cual era, asegurar la correcta aplicación de la seguridad social en salud a la que tenía derecho este, pero como se prueba en este proceso, COOMEVA EPS estuvo lejos de cumplir con las funciones y postulados a las que debe su existencia.





Con sustento en el artículo 2341 del Código Civil que prevé; “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito”. Por lo tanto, la responsabilidad medica se deriva de la obligación en principio contractual, del médico, EPS o IPS de cuidar la integridad corporal del paciente y de concluir de manera adecuada la relación prestacional del servicios médico<sup>4</sup>.

Teniendo en cuenta esta afirmación, tanto las EPS, las IPS y el personal médico tienen la obligación de proporcionar al paciente todas las herramientas curativas de las que dispongan, para obtener la cura del paciente. Por lo tanto, salvo pacto en contrario tanto las instituciones que brindan el servicio de salud como el médico responsable del acto médico, son solidariamente responsables de la producción de daños causados en dicho acto.

En reitera jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha establecido que aquellas demandas por responsabilidad medica contra personas jurídicas como EPS e IPS, con miras a la indemnización de perjuicios generados por el acto médico de sus subalternos, deberán responder de manera efectiva en consonancia de los artículos 1738 y 2347 del Código Civil. Sin perjuicio, de que el personal médico, como persona natural, este en la obligación de resarcir en virtud de falta de diligencia, actuar sin pericia o cuidado o *mala praxis*.<sup>5</sup>

Es conveniente precisar que la jurisprudencia ha especificado que la responsabilidad directa de las entidades prestadoras de servicios de salud, con ocasión del acto médico, estará comprometido, si y solo, si cuando el acto se ejecuta mediante dependientes, subordinados o por médicos vinculados a la institución. De esta forma, hospitales e instituciones médicas se verán inmersos en la obligación de reparar perjuicios, siempre que se demuestre que el personal médico vinculado a su institución, incurrió en la intervención quirúrgica, en el diagnostico o en el tratamiento del paciente que dio origen al daño<sup>6</sup>.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, es importante resaltar, que el acto de prestación de servicios médicos, en cualquiera de sus facetas, genera obligaciones directas a cargo del actor directo del servicio, es decir, del galeno tratante, por todos

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de mayo de 2005, exp. 14415. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar.

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 20 de abril de 1993 y reiterada en decisiones posteriores, entre ellas las emitidas el 30 de mayo de 1994 y 25 de marzo de 1999.

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de julio de 2010, exp. 41001 3103 004 2000 00042 01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.





aquellos perjuicios generados en particular por la "culpa profesional o dolo", cuya carga probatoria asume el demandante.

Esta responsabilidad solidaria entre las personas jurídicas IPS o EPS y el personal médico, sin perjuicio que la demanda pueda individualizar al causante directo del daño, y sin perjuicio de la "culpa profesional o dolo", trae consigo la posibilidad de individualizar al causante del daño, entre los solidarios responsables por el acto médico. Si la persona jurídica es demandada en un proceso de responsabilidad civil, no exonera la responsabilidad del personal médico que genero el daño, una vez se demuestre la relación de causalidad entre el hecho culposo ocasionado de forma subjetiva por el médico, como generador del perjuicio y sea el llamado a indemnizar a la institución<sup>7</sup>.

De las providencias anteriores destaco, la siguiente jurisprudencia:

Sentencia 2000-00042 de julio 22 de 2010:

"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 41001 3103 004 2000 00042 01

Magistrado Ponente:

**Dr. Pedro Octavio Munar Cadena**

Bogotá, D.C., veintidós de julio de dos mil diez

*Igualmente, concluyó que la sociedad Clínica de Fracturas y Ortopedia Limitada también era culpable de la ocurrencia del daño en cuestión, porque encontró, por un lado, que aquella no atendió debidamente el seguimiento de la salud del paciente, pues dejó los cuidados posoperatorios en manos de un auxiliar que tan solo cursaba séptimo semestre de enfermería, absteniéndose de ejercer control sobre la labor desplegada por el anesthesiólogo; y, por el otro, que la cirugía practicada a la víctima no llevaba implícito el desenlace que tuvo, pues la cianosis central puede evitarse proporcionando los cuidados de rigor en esa etapa del acto anestésico.*

*De esas elucidaciones emerge que la fuente de la responsabilidad atribuida a la prenombrada clínica no es la derivada del daño causado por un tercero por quien ella debía responder, vale decir, el hecho ajeno, como erradamente lo afirma el recurrente, sino el hecho propio, ya que el sentenciador la hizo responsable del daño cuya indemnización aquí se reclama, por haber encontrado que, por las razones indicadas, desatendió la salud de Arturo Vicente Villalba Cortés durante la etapa*

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de julio de 2010, exp. 41001 3103 004 2000 00042 01, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena.





posanestésica del acto quirúrgico al que fue sometido. En otras palabras, el fallador le imputó a dicha demandada ser "directamente" responsable del daño.

2. Al respecto, es necesario comenzar por precisar que los establecimientos clínicos, hospitalarios y similares son aquellas instituciones prestadoras de los servicios de salud, ya sean públicas, privadas o mixtas, en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental, y que estas pueden clasificarse, según el tipo de servicios que ofrezcan, como instituciones hospitalarias e instituciones ambulatorias de baja, media y alta complejidad (Ministerio de Salud, Res. 4445/96, arts. 1º y 2º).

Como se ve, dichas entidades están destinadas a la atención de la salud de los usuarios, derecho fundamental (C. Const., T-760, jul. 31/2008) del cual es garante el Estado, el que, en tal virtud, tiene la obligación de dirigir, coordinar y controlar la prestación del mismo, en aras de la consecución del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ahí que es a este al que le corresponde organizar, dirigir y reglamentar la prestación de los servicios de salud, como también establecer las políticas que deben orientar a las entidades privadas en la ejecución de esa tarea y ejercer su vigilancia y control (C.N., arts. 48, 49, 95 y 366).

Especial atención merece en este aspecto la disposición contenida en el artículo 78 de ese estatuto superior, conforme al cual "[l]a ley regulará el control de caridad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. (...) Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento de consumidores y usuarios...". Por supuesto que al enmarcar la producción y prestación de servicios (los públicos entre ellos) en el ámbito de la relación de consumo, el ordenamiento, en desarrollo, quizás, de las directrices contenidas en la Resolución 39/248 de las Naciones Unidas, pone de presente, entre otras preocupaciones, la necesidad de proteger a usuarios y consumidores frente a los riesgos que puedan afectar su salud y su seguridad y se compromete a "formular, fortalecer o mantener una política enérgica de protección del consumidor" (art. 2º de la aludida resolución). Tratándose de los servicios hospitalarios, es patente que, en algunas materias, ciertamente restrictas, tienen cabida, esos criterios, como acontece, verbigracia los relacionados con el aspecto hotelero de su gestión, o el suministro de insumos.

En ese orden de ideas, es palpable que, por un lado, los desarrollos normativos a los que se compromete el Estado deben estar orientados a la satisfacción de esos designios y, por otro, que el laborio hermenéutico de los jueces en torno de las reglas actualmente vigentes debe enderezarse en ese mismo sentido (interpretación pro consumatore). Las cosas se imponen de ese modo porque es incuestionable que la contratación masiva afectó, igualmente, la prestación del servicio de salud y produjo notables modificaciones en la relación médico paciente hasta entonces existente, que, de índole individual y personalizada, pasó a ser no solamente extensa, sino también





*compleja en cuanto actualmente está a cargo de organizaciones con carácter empresarial. No obstante, conviene acotar que corresponderá al legislador efectuar los desarrollos normativos pertinentes, sin que, valga la pena destacarlo, pueda el juzgador, **motu proprio** alterar los criterios de imputación.*

La falla de la prestación del servicio medico por parte de COOMEVA EPS salta a la vista, fue sumamente tardía en cumplir sus funciones de **ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD**, no solo no se promovió la salud de Elmer, sino que la entidad demandada se convirtió en un obstáculo infranqueable para que el señor Elmer tuviera un tratamiento acorde a sus necesidades, lo que la hace directamente responsable de su muerte.

### **Derecho a que la entidades responsables garanticen el acceso a los servicios de salud con calidad, eficacia y oportunidad**

La garantía constitucional de toda persona a acceder a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, contemplada dentro del derecho a la salud, ha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional, haciendo énfasis en las condiciones de calidad, eficacia y oportunidad con las que los servicios deben ser presentados.

El ámbito de protección constitucional en el acceso a los servicios de salud, son aquellos que la persona requiere, según el medico tratante, sin que ello signifique que el derecho a la salud sea absoluto, ilimitado e infinito en el tipo de prestación cobijadas.

### **Responsabilidad civil de las Entidades Promotoras de Salud, las Instituciones prestadoras de Salud y sus agentes:**

Bajo este entendido, la doctrina y la jurisprudencia colombiana han entendido que la prestación de servicios médicos en Colombia es un tema que se ha extendido a las entidades promotoras de salud, las instituciones prestadoras de salud y sus agentes, teniendo en cuenta que existen casos en los que pueden considerarse que estas pudieron incidir en el hecho que genero el daño, dicha responsabilidad se deriva de la ley 100 de 1993

En este sentido la Corte Constitucional en sentencia T-062 de 2017, estableció que la ley 100 de 1993 se creo con el objetivo de otorgar el amparo frente a aquellas contingencias a las que puedan verse expuestas las personas con la posibilidad de afectar su salud y su situación económica. De igual forma, y por interesar esta causa, la mencionada ley dispone como uno de los objetivos del sistema general de salud,



crear condiciones de acceso a todos los niveles de atención para toda la población, así mismo señalo que la ley 1751 de 2015 reconoció el carácter de fundamental que comporta este derecho, tal como la venia señalado la jurisprudencia constitucional. Dicha garantía consiste en una serie de medidas y prestación de servicios, en procura de su materialización, en el más alto nivel de calidad e integralidad posible.

De este apartado de la corte podemos concluir que las EPS, están obligadas a prestar los servicios de salud a sus afiliados en condiciones de universalidad, continuidad e integralidad sin interponer barreras de ninguna clase para la creación de los mismos.

Ahora bien la negación de estos servicios y la ineficacia en las prestaciones de los mismos, hace que produzcan un daño en el paciente, haciendo que esta situación adquiera el carácter de resarcible en razón a lo anterior, se establece que el incumplimiento de cualquiera de los deberes a cargo de una EPS que se encuentren establecidos a nivel legal y reglamentario y deriven posteriormente en un daño, genera en esta situación una obligación de resarcir los daños e indemnizar patrimonialmente los perjuicios causados.

Dicha situación va de la mano con la obligación para todas las personas de afiliarse al sistema general de seguridad social en salud bien sea a través del régimen subsidiario o contributivo, para poder garantizar la atención en salud.

A pesar de esta obligación que tiene las EPS, en la practica se presentan múltiples falencias que generan que la prestación del servicio de la salud a través de la E.P.S., no sea efectiva y ponga en riesgo la vida y salud de los usuarios.

En este orden de ideas teniendo en cuenta que la concreción de dichos servicios de salud se da a través de la IPS, es plausible también predicar la existencia de responsabilidad civil por parte de estas instituciones, así lo ha predicado la corte suprema de justicia donde aclara que la función que la ley asigna a las IPS las convierte en guardianas de la atención que prestan a sus clientes, por lo que habrán de responder de manera solidaria si se demuestran en el proceso los demás elementos de responsabilidad a su cargo, toda vez que las normas del sistema de seguridad social les imponen ese deber de prestación del servicio. El juicio de imputación del hecho como obra de las instituciones prestadoras del servicio de salud quedara desvirtuado si se prueba que el daño no se produjo por el quebrantamiento de los deberes legales de actuación de la IPS, sino a otra razón, como por ejemplo a una deficiencia organizativa, administrativa o presupuestal de la EPS, a la conducta de uno o varios agentes particulares por fuera del marco funcional DE LA IPS o en fin, a la





intervención jurídicamente relevante de un tercero, de la propia víctima o a un caso fortuito.

Se infiere entonces, la posibilidad de imputar la realización de un daño a una EPS o una IPS en el caso de que por incumplimiento de algún tipo de obligación a su cargo se produzca un daño a un paciente.

### **TITULO DE IMPUTACION DE LA FALLA DEL SERVICIO EN LA RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO MEDICO ESTATAL.**

La máxima autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia ha sostenido que "la falla del servicio o la falta en la prestación del mismo se configura por retardo, por irregularidad, por ineficiencia, por omisión o por ausencia del mismo. El retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio; la irregularidad, por su parte se configura cuando se presta el servicio en forma diferente a como debe hacerse en condiciones normales, contrariando las normas. Reglamentos u ordenes que lo regulan y la ineficiencia se da cuando la administración presta el servicio, pero no con diligencia y eficacia, como es su deber legal.

También se da en la omisión o audiencia del mismo cuando la administración, teniendo en cuenta el deber legal de prestar el servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía.

En nuestro ordenamiento jurídico existe dos clases de fallas las cuales son la "falla presunta y la falla probada" en la primera de acuerdo al consejo de estado expresa que la falla presunta es la dicha presunción, por admitir prueba en contrario, permite a la parte que se le atribuye el daño, demostrar la diligencia y cuidado en su actuación, es decir, que actuó dentro de los cánones de la mayor eficiencia posible, sin culpa, donde el actor no tendrá que demostrar la conducta omisiva o irregular de la administración porque esta se presume. Y en la falla probada, el consejo de estado, afirma que le incumbe a la parte actora la carga probatoria de demostrar: 1- Que el servicio no funciono tardía o irregularmente porque no se presto dentro de las mejores condiciones que permitía la organización misma del servicio su infraestructura en razón de las dolencias tratadas, no solo en cuanto a equipo, sino en cuanto a personal medico y paramédico; 2- que la conducta así cumplida u omitida causo un daño al usuario y comprometió la responsabilidad del ente estatal a cuyo cargo estaba el servicio, y 3- que entre aquella y este existió una relación de casualidad.

Es solidariamente responsable la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), por ser esta la Administradora de los Recursos





del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que tiene como objetivo garantizar el adecuado flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) e implementar los respectivos controles.

Entre las funciones principales se encuentran:

- Administrar los recursos del SGSSS y del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (FONSAET).
- Efectuar reconocimiento y pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del aseguramiento obligatorio en salud.
- Realizar pagos, efectuar giros directos a los prestadores y proveedores de tecnologías en salud y transferencias a los agentes del sistema que optimice el flujo de los recursos.
- Adelantar las verificaciones que promuevan la eficiencia en la gestión de los recursos.
- Desarrollar los mecanismos para el fortalecimiento financiero de las entidades.
- Administrar la información propia de sus operaciones.

Luego en virtud de que la EPS COMEVA, es una entidad mala paga, que tiene deudas millonarias con las IPS, la sentencia que aquí se dicte sería una mera ilusión, a no ser que se vincule a la ADRES, para que este pague directamente la condena, en lugar de hacerlo a la EPS COOMEVA, pues Entre los principales procesos que opera la ADRES se encuentran:

- Recaudo de los recursos del SGSSS definidos en el artículo 67 de la Ley 1753 de 2015.
- Administración de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del SGSSS.
- Procesos de Reconocimiento y Pago de Recursos a favor de actores del SGGG.
- Proceso de Compensación del Régimen Contributivo.
- Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del Régimen Subsidiado.
- Recobros por Prestaciones de Salud no Incluidas en la Plan de Beneficios en Salud.
- Reclamaciones por Accidentes de Tránsito y Eventos Catastróficos y Terroristas.
- Mecanismos de Apalancamiento Financiero a EPS e IPS:
- Compra de Cartera de EPS e IPS.
- Tasa Compensada.
- Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones - BOCAS.

¿Qué recursos administrará la ADRES?

La Entidad administra los siguientes recursos:

- Sistema General de Participaciones (SGP) Salud componente de subsidios a la demanda.





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

- Sistema General de Participaciones (SGP) que financian FONSAET (...).

¿Cuál es el destino de los recursos administrados por la ADRES?

Los recursos administrados se destinarán a:

- Reconocimiento y pago a las EPS por el aseguramiento y demás prestaciones que se reconocen a los afiliados al SGSSS, incluido el pago de incapacidades por enfermedad de origen común que superen los quinientos cuarenta (540) días continuos.
- Pago de las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente y auxilio funerario a víctimas de eventos terroristas o eventos catastróficos, así como los gastos derivados de la atención psicosocial de las víctimas del conflicto.
- Pago de los gastos derivados de la atención en salud inicial a las víctimas de eventos terroristas y eventos catastróficos.
- Pago de los gastos financiados con recursos del impuesto social a las armas y de municiones y explosivos y multas.
- Fortalecimiento de la Red Nacional de Urgencias.
- Financiamiento de programas de promoción y prevención.
- Inspección, vigilancia y control a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud.
- Pago de prestaciones no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), hoy financiados con recursos del FOSYGA.
- Medidas de atención contenidas en la Ley 1257 de 2008, en los términos que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Finalidades señaladas en los artículos 41 del Decreto- Ley 4107 de 2011 y 9 de la Ley 1608 de 2013.
- Cubrimiento de los gastos de administración, funcionamiento y operación de la entidad.
- Demás destinaciones que haya definido la Ley con cargo a los recursos del FOSYGA y del FONSAET.
- Pago de los gastos e inversiones requeridas que se deriven de la declaratoria de la emergencia sanitaria y/o eventos catastróficos en el país.

Colofón a lo antes expuesto, acudo a:

La honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia T-239/19 enuncio lo siguiente:

**"DERECHO A LA SALUD**-Vulneración al imponer barreras administrativas y burocráticas

*Las EPS no pueden aducir dificultades administrativas o de trámite para suspender o negar servicios de salud requeridos por los pacientes, menos aún, cuando se trata de*





*personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y/o revisten las calidades de sujeto de especial protección constitucional*

**PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD-**  
*La prestación del servicio de salud debe ser oportuna, eficiente y de calidad*

*Diferentes fuentes jurídicas a nivel internacional y nacional reconocen que la protección efectiva del derecho fundamental a la salud requiere garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para lograr el disfrute más alto posible de bienestar físico y mental, siempre bajo condiciones de dignidad humana. Esto también implica la salvaguarda de los principios de accesibilidad e integralidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según los cuales los servicios y tecnologías del sistema deben ser accesibles a todos los usuarios, quienes tiene el derecho a recibir una atención y tratamiento completos, sin que puedan ser fraccionados por razones administrativas y/o financieras*

**DERECHO DE ACCESO AL SERVICIO DE SALUD-***Debe ser sin demoras y cargas administrativas que no les corresponde asumir a los usuarios*

*Las dificultades o eventuales fallas del MIPRES no pueden ser un obstáculo para el acceso efectivo e integral de los servicios ordenados a un paciente por su médico tratante. Son las EPS quienes deben acatar la orden médica sin dilación alguna y posteriormente iniciar los trámites a que haya lugar ante el Ministerio de Salud y Protección Social y/o ante la ADRES para obtener el recobro de los gastos incurridos” (...).*

Al respecto, la reciente sentencia T-464 de 2018 explicó, en un caso semejante, que la prestación de servicios de salud y/o entrega de medicamentos o insumos debe analizarse con base en tres posibilidades:

- "i. Que se encuentren incluidos en el PBS con cargo a la UPC, en cuyo caso, al ser prescritos, deben ser suministrados por la EPS y financiados por la UPC;*
- ii. Que no estén expresamente incluidos en el PBS con cargo a la UPC o que, a pesar de estarlo en el PBS, no sean financiados por la UPC. **En este evento, se deberá adelantar el procedimiento previsto por la Resolución 1885 de 2018 para su suministro y para que la EPS solicite el recobro a la ADRES.** Adicionalmente, en caso de ser reclamados en sede de tutela, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos decantados por la jurisprudencia de esta Corporación para ordenar su autorización; o*
- iii. Que se encuentren excluidos expresamente del Plan de Beneficios en Salud, como consecuencia del procedimiento de exclusión previsto por la Resolución 330 de 2017.” (...).*





Como reglas jurídicas para decidir este caso, la Sala destaca que diferentes fuentes jurídicas a nivel internacional y nacional reconocen que la protección efectiva del derecho fundamental a la salud requiere garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para lograr el disfrute más alto posible de bienestar físico y mental, siempre bajo condiciones de dignidad humana.

Esto también implica la salvaguarda de los principios de *accesibilidad* e *integralidad* del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según los cuales los servicios y tecnologías del sistema deben ser accesibles a todos los usuarios, quienes tiene el derecho a recibir una atención y tratamiento completos, sin que puedan ser fraccionados por razones administrativas y/o financieras.

A su vez, este punto se enlaza con la prohibición para las EPS de anteponer barreras administrativas para la prestación de servicios de salud, dado que esto implica trasladar a los pacientes demoras que no deben soportar y que, peor aún, pueden poner en peligro su integridad y vida en condiciones dignas.

De tal forma, los ciudadanos no tienen la obligación de asumir las consecuencias perjudiciales de las trabas administrativas y demás dificultades que abarca la gestión, administración y financiación del sistema de salud en Colombia.

Por otra parte, la Corte reitera que la prestación de servicios de salud y/o entrega de medicamentos o insumos debe analizarse con base en las siguientes alternativas:

(...)" De otra parte, la corte suprema de justicia, tribunal de cierre de la justicia ordinaria, ha dicho:

*"La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia casó una decisión en la que se había negado la atribución de responsabilidad civil a una entidad promotora de salud y a sus agentes por la muerte de una paciente con una apendicitis mal diagnosticada.*

*Dentro de las consideraciones que hacen parte de la sentencia sustitutiva la corporación explicó la figura de la imputación del daño a las empresas promotoras de salud (EPS), a las instituciones prestadoras del servicio (IPS) y a sus agentes.*

*Precisamente, recordó que la atribución de un daño a un sujeto como obra suya va más allá del concepto de causalidad física y se inserta en un contexto de imputación en virtud de la identificación de los deberes de acción que el ordenamiento impone a las personas.*

*La Ley 100 de 1993, por ejemplo, asigna a las EPS la función básica de organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los*





*afiliados, por lo que los daños sufridos por los usuarios con ocasión de la prestación del servicio de salud les son imputables a aquellas como suyos, independientemente del posterior juicio de reproche culpabilístico que llegue a realizar el juez y en el que se definirá finalmente su responsabilidad civil.*

*Luego, de quedar probado en un proceso que el daño sufrido por el paciente se originó en los servicios prestados por la EPS a la que se encuentra afiliado es posible atribuir tal perjuicio a la empresa como obra suya, debiendo responder patrimonialmente si confluyen en su cuenta los demás elementos de la responsabilidad civil.*

*Por supuesto que si se prueba que el perjuicio se produjo por fuera del marco funcional que la ley impone a la empresa promotora, quedará desvirtuado el juicio de atribución, lo que podría ocurrir, por ejemplo, si la atención brindada al cliente fue por cuenta de otra EPS o por cuenta de servicios particulares; si la lesión a la integridad personal del paciente no es atribuible al quebrantamiento del deber de acción que la ley impone a la empresa sino a otra razón determinante; o, en fin, si se demuestra que el daño fue el resultado de una causa extraña o de la conducta exclusiva de la víctima.*

*De igual modo, el artículo 185 de la Ley 100 impone a las IPS ser las guardianas de la atención que prestan a sus clientes. Así las cosas, responden de manera solidaria si se demuestran en el proceso los demás elementos de la responsabilidad a su cargo.*

*No obstante, el juicio de imputación del hecho como obra de IPS quedará desvirtuado si se prueba que el daño no se produjo por el quebrantamiento de los deberes legales de actuación de la IPS, sino a otra razón, como por ejemplo a una deficiencia organizativa, administrativa o presupuestal de la EPS.*

*Ahora bien, el alto tribunal indicó que en el caso de los médicos y especialistas la responsabilidad se atribuye tras considerar las acciones, omisiones o procesos individuales que, según un marco valorativo, incidieron de manera preponderante en el daño sufrido por el usuario y dependiendo del control o dominio en la producción del mismo.*

*De este modo se atribuye el hecho dañoso a un agente determinado, quien responderá en forma solidaria con la EPS y la IPS, siempre que confluyan en ellos todos los elementos de la responsabilidad civil (M. P. Ariel Salazar)<sup>8</sup>.*

## **LEY 640 DEL 2001**

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia Sala Civil, Sentencia SC-139252016 (05001310300320050017401), sep. 30/16.





**ARTICULO 21. SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DE LA CADUCIDAD.** *La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.*

### **El principio de confianza legítima**

El artículo 83 de la Constitución Política señala que las actuaciones de los particulares y de la administración se deben enmarcar dentro de los postulados de la buena fe, la cual se presumirá, hasta que la misma sea desvirtuada. Sobre el particular expresa:

*"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas".*

Este principio ha sido desarrollado en múltiples ocasiones por esta Corporación, estudiando las relaciones entre los particulares y la administración. Implicación que reviste, el actuar leal del usuario y la posición clara de la administración al momento de adelantar los trámites, y que éstos últimos estén ajustados a las reglas preestablecidas para el caso concreto.

Así las cosas, la defensa del principio de confianza legítima propende por la protección del administrado, para que este no sufra cambios intempestivos, cuando de forma previa se ha iniciado un trámite. La confianza legítima *"es aplicable a situaciones en las cuales el ciudadano no tiene realmente un derecho adquirido, sino que se encuentra en una posición jurídica que puede ser modificable por la administración"*. Al respecto la Corte ha señalado:

*"(...) si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación. Eso sucede, por ejemplo, cuando una autoridad decide súbitamente prohibir una actividad que*





*antes se encontraba permitida, por cuanto en ese evento, es deber del Estado permitir que el afectado pueda enfrentar ese cambio de política”.*

Este principio conlleva a que la relación entre los ciudadanos y la administración tenga como fundamento la normatividad existente para adelantar el trámite establecido para que ambas partes actúen de buena fe. Situación que genera en el administrado una expectativa sobre la posible resolución de una determinada situación.

Este presupuesto no se relaciona exclusivamente con las decisiones adoptadas o los trámites establecidos. El principio de confianza legítima también se puede predicar de las respuestas e instrucciones que pueda recibir el administrado dentro del desarrollo del proceso mismo.

Por su parte, la sentencia T-715 de 2014 indicó que *“el principio de la confianza legítima constituye una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares y permite conciliar, en ocasiones, el interés general y los derechos de las personas. Esa confianza legítima se fundamenta en los principios de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en la seguridad jurídica estipulada en los artículos 1º y 4 del Ordenamiento Superior y en el respeto al acto propio y adquiere una identidad propia en virtud de las especiales reglas que se imponen en la relación entre administración y administrado”.*

Así las cosas, la buena fe puede entenderse como un mandato de *“honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña la palabra comprometida (...) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los demás, dota de (...) estabilidad al tránsito jurídico y obliga a las autoridades a mantener cierto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo”.*

En conclusión, *“el principio de la confianza legítima se ha aplicado cuando al administrado se le ha generado una expectativa seria y fundada de que las actuaciones posteriores de la administración, y en casos excepcionales de los particulares, serán consecuentes con sus actos precedentes, lo cual generan una convicción de estabilidad en sus acciones”.*

En torno a la historia clínica el precedente judicial ha dictado:

*“Debe puntualizarse la relevancia de la historia clínica. Por mandato normativo, la historia clínica consigna de manera cronológica, clara, precisa, fidedigna, completa, expresa y legible todo el cuadro clínico en las distintas fases del acto médico desde*





su iniciación hasta su culminación, a partir del ingreso del paciente a una institución hasta su culminación, a partir del ingreso del paciente a una institución de salud a su salida, incluso en la rehabilitación, seguimiento y control; contiene registros de los antecedentes, y el estado de salud del paciente, la anamnesis, el diagnóstico, tratamiento, medicamentos aplicados, la evolución, el seguimiento, control, protocolo quirúrgico, indicación del equipo médico, registro de la anestesia, los estudios complementarios, la ubicación en el centro hospitalario, el personal, las pruebas diagnósticas, etc. Tratase de un documento probatorio sujeto a reserva o confidencialidad legal cuyo titular es el paciente y cuya custodia corresponde al profesional o prestador de salud al cual puede acceder aquel, el usuario, las personas autorizadas por éstos, el equipo de salud y las autoridades competentes en los casos legales, ostenta una particular relevancia probatoria para valorar los deberes de conducta del médico, la atención médica al paciente, su elaboración en forma es una obligación imperativa del profesional e instituciones prestadoras del servicio, y su omisión u observancia defectuosa, irregular e incompleta, entraña importantes consecuencias, no sólo en el ámbito disciplinario sino en los procesos judiciales, en especial, de responsabilidad civil, por constituir<sup>9</sup>.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia SC 13925 de 2016 radicado #05001-31-03-003-2005-00174-01 dijo lo siguiente:

*"Las pautas de atribución de un hecho a un agente, en suma, se infieren a partir de los deberes de acción que impone el ordenamiento jurídico, como por ejemplo las normas de familia que asignan obligaciones de ayuda mutua entre los cónyuges; o a los padres, tutores y curadores hacia los hijos u otros sujetos bajo su cuidado; los deberes de protección a cargo del empleador; las obligaciones de seguridad de los establecimientos comerciales y hospitalarios; la obligación de prestación de una atención en salud de calidad que la Ley 100 de 1993 impuso a las organizaciones proveedoras de servicios médicos; las situaciones que consagran los artículos 2343 y siguientes del Código Civil; o las que ha establecido la jurisprudencia, tales como el concepto de 'guardián de la cosa'.*

*En virtud de tales deberes la imputabilidad (posibilidad de atribución de los hechos) se generaliza en procesos abstractos de institucionalización de expectativas que hacen factible que las selecciones sean pertinentes o aplicables a todos los sujetos que están en situaciones similares. Esta preconcepción se requiere, inclusive, para la determinación de la responsabilidad objetiva, pues no es posible atribuir un resultado lesivo a un artífice 'como suyo' si el ordenamiento no permite hacer esa atribución.*

*Para que el juez declare que un hecho es obra de un agente, deberá estar probado en el proceso (sin importar a quien corresponda aportar la prueba), que el hecho desencadenante del daño ocurrió bajo su esfera de control y que actuó o dejó de*

<sup>9</sup> CSJ SC 17 de noviembre de 2011, Rad. 1999 00533 01.





*actuar teniendo el deber jurídico de evitar el daño. El juicio de imputación del hecho quedará desvirtuado si se demuestra que el demandado no tenía tal deber de actuación”.*

Por ello es forzoso concluir que el padecimiento de pérdida funcional del brazo derecho del demandante es conclusión de una falla del servicio médico de la entidad demandada.

Consecuentemente la doctrina establece el significado de conceptos de obligatorio pronunciamiento así:

### **“Contenidos**

- [Qué es la historia clínica de un paciente y para qué sirve](#)
- [Qué es la historia clínica de un paciente y para qué sirve](#)

*Interoperabilidad de Datos de la Historia Clínica en Colombia Términos y siglas, tomados de documento creado el 10 de julio de 2019 y Elaborado por la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación de MINSALUD, disponible en GOOGLE - <https://www.minsalud.gov.co/> -*

## **1. DEFINICIONES DE HISTORIA CLÍNICA**

### **1.1. Historia clínica**

*La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente y contiene los datos de los pacientes de acuerdo con la Ley 23 de 1981, por la cual se dictan normas en materia de ética médica y de acuerdo con el artículo 34 “La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la Ley”. Entiéndase que todos los datos de los pacientes son parte integral de la historia clínica (...).*

## **2. ESTÁNDAR DE DATOS**

### **2.1. Conjunto de elementos de dato para la interoperabilidad**

*Son el conjunto de elementos de datos comunes e interoperable que debe desarrollarse en cualquier nivel de atención de salud, que apoya en primera instancia la gestión y el control como marco del nivel local o institucional, territorial y nacional, y que permite la interoperabilidad entre agentes del Estado Colombiano, sobre la base de estándares obligatorios de intercambio de datos (...).*





2.5. *Conjunto de elementos de datos* El conjunto de elementos de datos para la interoperabilidad está conformado por:

- *Elementos de datos de información del usuario de los servicios de salud que apoyan la atención y motivan la determinación de riesgos.*
- *Elementos de datos de contacto con el servicio de salud.*
- *Elementos de datos relacionados con las tecnologías en salud entregadas al usuario como son: procedimientos en salud, medicamentos, dispositivos médicos, componentes anatómicos y los sistemas organizativos y de soporte con los que se presta esta atención en salud, entre otras.*
- *Elementos de datos de los resultados de valoración clínica y de laboratorio que conllevan a determinar el resultado final obtenido u observado.*
- *Otros elementos de datos que identifique el Ministerio de Salud y Protección Social (...).*

#### 4-. *NORMATIVIDAD DE HISTORIA CLÍNICA*

*La normatividad referida a los contenidos, la generación, la transferencia, la conservación, seguridad y protección de los datos de historia clínica en general, es la siguiente:*

- *Ley 23 de 1981, en materia de ética médica,*
- *Ley 527 de 1999, sobre comercio electrónico,*
- *Ley 594 de 2000 y todos los acuerdos promulgados por el Archivo General de la Nación,*
- *Ley 1581 de 2012, por la cual se expiden normas generales para la protección de datos personales,*
- *Ley 1712 de 2014, Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.*
- *Plan nacional de desarrollo 2019-2022*
- *Decreto 2364 de 2012, Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones.*
- *Decreto 1074 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, capítulo 25 del título 2 del libro 2 de la parte 2 y las normas que las modifiquen, reglamenten o sustituyan.*
- *Decreto 1080 de 2015, Título II, Capítulo V, Gestión de Documentos, artículos 2.8.2.5.1. al 2.8.2.8.3, el Acuerdo 07 de 1994, referente al Reglamento General de Archivos, del Archivo General de la Nación.*
- *Resolución 839 de 2017, que establece el manejo, custodia, tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas, y la reglamentación del procedimiento que deben adelantar las entidades del SGSSS-, para el manejo de estas en caso de liquidación,*
- *Resolución 1995 de 1999, establece la norma para el manejo de la Historia Clínica, el consentimiento informado y los anexos de la Historia Clínica,*
- *Circular 02 de 1997 expedida por el Archivo General de la Nación*
- *Resolución 3374 de 2000 de Minsalud,*
- *Resolución 2003 de 2014 de Minsalud.*





- Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.
- Resolución 1918 de 2009, por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones ".

## **DAÑO MORAL**

"...**DAÑO MORAL:** En preservación de la integridad del sujeto de derecho, el resarcimiento del daño moral no es un regalo u obsequio gracioso, tiene por causa el quebranto de intereses protegidos por el ordenamiento jurídico con basamento en el menoscabo de la esfera sentimental y afectiva de la persona, la cual corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el cual debe repararse en causa en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, compromiso ineludible de todo juzgador, en consecuencia se estima este daño, según el criterio del Consejo de Estado en 100 salarios mínimos legales vigentes.

## **DAÑO A LA VIDA DE RELACION**

**Para despejar este aspecto preciso acudir la sentencia SC20950-2017 (Radicación N° 05001-31-03-005-2008-00497-01.**

(Aprobada en sesión de quince de agosto de dos mil diecisiete). **la corte suprema de justicia. M.P ARIEL SALAZAR RAMÍREZ.**

"(...)

## **CONSIDERACIONES**

1. El daño no patrimonial -sostuvo esta Sala- se puede presentar de varias maneras, a saber: i) mediante la lesión a un sentimiento interior y, por ende, subjetivo (daño moral); ii) como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación); o, iii) como vulneración a los derechos humanos fundamentales como el buen nombre, la propia imagen, la libertad, la privacidad y la dignidad, que gozan de especial protección constitucional (CSJ SC10297-2014, 5 ago. 2014, Rad. 2003-00660-01).

Si bien las «subespecies del daño extrapatrimonial no pueden confundirse entre sí, pues cada una de ellas posee su propia fisonomía y peculiaridades que las distinguen de las demás y las hacen merecedoras de tutela jurídica», eso no impide que como a menudo acontece «confluyan en un mismo daño por obra de un único hecho lesivo» (ibídem).





2. Esa enunciación es el resultado de una evolución jurisprudencial trazada desde la providencia CSJ SC, 13 May. 2008, Rad. 1997-09327-01, donde se analizó a profundidad el concepto de «daño en la vida de relación» como una de las formas de perjuicios extrapatrimoniales con entidad suficiente para distinguirse de las demás, puesto que, como allí se indicó:

(...) a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó "actividad social no patrimonial" (...) Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar.

Fue así como en ese pronunciamiento se puntualizó que el «daño en la vida de relación» cuenta con las siguientes características o particularidades:

- a) tiene naturaleza extrapatrimonial o inmaterial, en tanto que incide o se proyecta sobre intereses, derechos o bienes cuya apreciación es económicamente inasible, por lo que no es dable efectuar una mensura que alcance a reparar en términos absolutos la intensidad del daño causado;
- b) adquiere trascendencia o se refleja sobre la esfera externa del individuo, situación que también lo diferencia del perjuicio moral propiamente dicho;
- c) en las situaciones de la vida práctica o en el desenvolvimiento que el afectado tiene en el entorno personal, familiar o social se manifiesta en impedimentos, exigencias, dificultades, privaciones, vicisitudes, limitaciones o alteraciones, temporales o



*definitivas, de mayor o menor grado, que él debe soportar o padecer, las cuales, en todo caso, no poseen un significado o contenido monetario, productivo o económico;*

*d) no sólo puede tener origen en lesiones o trastornos de tipo físico, corporal o psíquico, sino también en la afectación de otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, e incluso en la de otro tipo de intereses legítimos;*

*e) según las circunstancias de cada caso, puede ser sufrido por la víctima directa de la lesión o por terceros que igualmente resulten afectados, como, verbigracia, el cónyuge, el compañero o la compañera permanente, los parientes cercanos o los amigos, o por aquélla y éstos;*

*f) su reconocimiento persigue una finalidad marcadamente satisfactoria, enderezada a atemperar, lenificar o aminorar, en cuanto sea factible, los efectos negativos que de él se derivan; y*

*g) es una noción que debe ser entendida dentro de los precisos límites y perfiles enunciados, como un daño autónomo que se refleja en la afectación de la actividad social no patrimonial de la persona, vista en sentido amplio, sin que pueda pensarse que se trata de una categoría que absorbe, excluye o descarta el reconocimiento de otras clases de daño - patrimonial o extrapatrimonial - que posean alcance y contenido disímil, ni confundirlo con éstos, como si se tratara de una inaceptable amalgama de conceptos, puesto que una indebida interpretación conduciría a que no pudiera cumplirse con la reparación integral ordenada por la ley y la equidad, como infortunadamente ha ocurrido en algunos casos, en franco desmedro de los derechos que en todo momento han de asistir a las víctimas (el destacado no es del texto).*

*Para el efecto de obtener una verdadera satisfacción que mengüe esos resultados adversos, en el referido fallo se llamó la atención de los jueces en pro de que para identificarlo observaran «especial prudencia y sensatez, principalmente para evitar a toda costa que dicho perjuicio sea confundido con otro de diverso linaje o que un determinado agravio pueda llegar erradamente a ser indemnizado varias veces», procediendo «con sujeción al marco fáctico sustancial descrito en la causa petendi que sirva como soporte de las pretensiones y al resultado que arrojen los medios probatorios recaudados en el proceso».*

*De la misma manera -añadió- debe realizarse un análisis «encaminado a desentrañar el alcance real de los obstáculos, privaciones, limitaciones o alteraciones que, como consecuencia de la lesión, deba afrontar la víctima con respecto a las actividades ordinarias, usuales o habituales, no patrimoniales, que constituyen generalmente la vida de relación de la mayoría de las personas, en desarrollo del cual podrán acudir a presunciones judiciales o de hombre, en la medida en que las circunstancias y antecedentes específicos del litigio les permitan, con fundamento en las reglas o*





máximas de la experiencia, construir una inferencia o razonamiento intelectual de este tipo».

*Y en la fijación del quantum también se requiere mesura y cuidado «bajo el entendido de que ella no puede responder solamente a su capricho, veleidad o antojo, sino que debe guardar ponderado equilibrio con las circunstancias alegadas y demostradas dentro de la controversia, velando así porque no sea desbordada la teleología que anima la institución de la responsabilidad civil».*

*Esa posición fue reiterada en el fallo CSJ SC, 18 Sep. 2009, Rad. 2005-00406-01, que insistió en que el «daño moral, en sentido lato, está circunscrito a la lesión de la esfera sentimental y afectiva del sujeto», esto es, la intimidad del afectado, que se hace explícito «material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbación de ánimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicción, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, perturbación anímica, desolación, impotencia u otros signos expresivos», que «(...) aún en la hipótesis de provenir de la lesión concurrente de otros intereses, por ejemplo, los derechos de la personalidad, la salud e integridad, es una entidad separada e independiente, cuyo resarcimiento es diferente, al tratarse recta y exclusivamente, del detrimento experimentado por el sujeto en su espectro interior, afectivo y sentimental, sin comprender su órbita exterior, proyecto, calidad de vida, actividad o desarrollo vivencial».*

*Bajo el mismo criterio, la providencia CSJ SC, 28 Ene. 2009, Rad. 1993-00215-01 memoró que «si bien la jurisprudencia colombiana al referirse en un comienzo a los perjuicios extrapatrimoniales solamente aludía a los morales, lo cierto es que hoy reconoce que de esa naturaleza participa el denominado "daño a la vida de relación", aceptando que éste tiene una entidad jurídica propia y, por ende, no puede confundirse con otras clases de agravios que posean alcance y contenido disímil, ni subsumirse en ellos».*

*El tema también fue objeto de análisis en el pronunciamiento CSJ SC, 9 Dic. 2013, Rad. 2002-00099-01, para denotar que «dentro del conjunto de bienes no patrimoniales que pueden resultar afectados mediante una conducta dolosa o culposa se encuentran comprendidos intereses jurídicos distintos a la aflicción, el dolor, o la tristeza que se produce en la víctima», como acontece con el «daño a la vida de relación (...) que en nuestra jurisprudencia ha adquirido un cariz autóctono, ajustado a las particularidades de nuestra realidad social y normativa», que si bien son de difícil cuantificación al no poderse establecer con base en criterios rigurosos o matemáticos «ello no se traduce en una deficiencia de esa clase de indemnización, sino en una diferencia frente a la tasación de los perjuicios económicos cuya valoración depende de parámetros más exactos».*

*3. El anterior recuento se hace para resaltar como en la actualidad la jurisprudencia tiene decantado que el «daño moral» y el «daño a la vida de relación» son dos*





*manifestaciones separadas de perjuicios inconfundibles para los fines de reparación, pues, mientras el primero se refiere al padecimiento interno del afectado con el hecho dañoso, el último se contrae a las secuelas que éste tenga en el desenvolvimiento social del lesionado, en vista de los cambios externos en su comportamiento.*

*Pero a pesar de esa independencia conceptual, algunas manifestaciones de la voluntad pueden patentizar la coexistencia de ambos, sin que por ello se entiendan subsumidos como un todo o que el peso de uno dé por excluida la trascendencia del otro, puesto que la complejidad de la psique humana, que abarca tanto aspectos conscientes como inconscientes del individuo, impide deducir iguales o semejantes consecuencias de un mismo suceso.*

*No siempre la congoja por la muerte de un ser cercano y querido va unida al distanciamiento de los familiares, ni la socialización quiere decir falta de angustia por ese acaecimiento o que sea menor en comparación con quien se aísla de su entorno. Mucho menos existen reglas de conducta preestablecidas para afrontar el fallecimiento intempestivo de los integrantes del núcleo familiar, pero eso sí, la manera como lo haga cada uno de los supervivientes puede incidir sustancialmente en la de los demás.*

*De ahí que nada obsta para que la apatía y el alejamiento, fuera de entenderse como exteriorizaciones del dolor ocasionado con el hecho luctuoso, trasciendan a un desentendimiento de lo que pasa alrededor y una modificación de las condiciones de vida, como alteración consecencial directa del daño.*

*Adicionalmente, a pesar de la individualización de esas dos clases de lesiones extrapatrimoniales, no pueden pasarse por alto las coincidencias al momento de percatarse de su existencia, siendo que en ambos casos cobran importancia las reglas de la experiencia del fallador y que son fijados por arbitrium iudicis (...)"*

**RESPECTO DE LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES**, esta misma corporación, sostuvo:

*"(...) En lo referente al «daño de vida en relación» reexaminó los testimonios para concluir que «la muerte de Osorio entraña afectación en la señora Soto, lo que de acuerdo a los testimonios recaudados implicaron un aislamiento familiar (folios 105-106 y 108-109 C. 3o), aunado que las reglas de la experiencia hacen que se advierta el alto impacto que tiene en una pareja en los albores de su relación familiar el perder a un cónyuge, por lo que el arbitrio judicial lleva a indicar que el mismo será tasado en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes».*

*"(...) En cuanto a la menor consideró que aunque «tenía pocos años de edad cuando su padre murió, ese solo hecho hace que en su crecimiento y desarrollo vaya a ser ausente la figura paterna, cuestión que en sí misma y de acuerdo a las reglas de la experiencia ya constituye en menoscabo, por lo que la cuantificación del daño en atención al arbitrio iudicis, lo pertinente se fija en cincuenta (50) salarios mínimos*





*legales mensuales vigentes», aclarando que tales daños «no fueron excluidos expresamente de la póliza que soportó la acción directa y el llamamiento en garantía, lo que hace que deban ser objeto de recobro a la luz del artículo 1127 del C. de Co. (...)"*

Ahora, teniendo en cuenta que el artículo 25, 6º inciso, para efectos de determinar la cuantía cuando se hagan reclamaciones extrapatrimoniales, exige que se tenga en cuenta los topes máximos de la jurisprudencia, me permitiré citar, para complementar la anterior citar jurisprudencial, la siguiente sentencia:

SENTENCIA SC5686 -2018 (2004- 0004..... "(.....)

*En efecto, las circunstancias del inmenso dolor que se refleja en la ferocidad y barbarie de las acciones padecidas por los demandantes daban, con toda seguridad, lugar a que el Tribunal impusiera una condena acorde con esa realidad, así fuese tomando la suma que como guía por entonces tenía la Corte establecida desde 2012 y que, frente a la indecible atrocidad de los eventos narrados y probados en este proceso ameritan –para este caso particular- una suma mayor a la que entonces tenía dispuesta (\$60,000,000.00) y que hoy reajusta a setenta y dos millones de pesos (\$72,000,000.00) para el daño moral propio sufrido por los demandantes a raíz del fallecimiento de padres, hijos, esposos y compañeros permanentes, la mitad de ese valor para hermanos, abuelos y nietos y la cuarta parte para el resto de parientes, conservando de esa forma el criterio establecido por la sala de decisión civil del Tribunal en cuanto a que, las circunstancias modales que hubieron de sufrir los reclamantes fueron, en términos generales, las mismas y el parámetro de una tasación similar, en consecuencia, se impone.*

*De lo anterior se concluye que el valor a resarcir a mis procurados, por tal concepto es la suma de \$72.000.000, 00 para cada uno.*

*RESPECTO AL TOPE PARA EL RECONOCIMIENTO Y PAGO AL DAÑO A LA VIDA DE RELACION, la jurisprudencia acabada de citar, para efectos de los daños morales, es la misma que citaré para este aspecto (...).*

*Y en cuanto al daño a la vida de relación habrá de condenarse a la demandada a pagar la suma de cincuenta millones de pesos (\$50,000,000.00) a los demandantes que reclamaron este tipo de perjuicio y lo sustentaron en el recurso de casación en el cargo que resultó próspero, sin que toque la Corte lo que el Tribunal reconoció por razón de las quemaduras y cicatrices padecidas, pues la óptica del embate airoso fue poner de presente otra faceta de este tipo de daño y no propiamente el de las asociadas a secuelas, cicatrices o deformidades".*

Por cierto, que las pautas de la jurisprudencia en torno a la tasación de perjuicios extrapatrimoniales, con fundamento el prudente arbitrio del juez, fueron acogidas expresamente por el artículo 25 del Código General del Proceso, en cuyo inciso final





se previó que cuando se reclame indemnización por esos conceptos, *«se tendrán en cuenta, solo para efectos de determinar la competencia por razón de la cuantía, los parámetros jurisprudenciales máximos al momento de la presentación de la demanda»*.

De lo anterior, se concluye, que en la jurisdicción civil a diferencia de la jurisdicción contenciosa no hay un rígido parámetro preestablecido para cuantificar el daño extrapatrimonial, empero ha fijado unos topes máximos, los cuales han sido tenidos en cuenta para efectos de la presente demanda.

Luego de establecer la responsabilidad civil, se debe enunciar las normas de responsabilidad administrativa que rigen:

Artículo 90 Constitución Política de 1991:

*"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

*En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".*

La entidad demandada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), es una entidad de naturaleza especial del nivel descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, lo que provoca que el juez competente sea el administrativo y sea necesario involucrar disposiciones emitidas de esta especialidad:

Artículo 104 de la ley 1437 de 2011:

**"DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

*Igualmente conocerá de los siguientes procesos:*

- 1. Los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.*
- 2. Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.*





3. Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en los cuales se incluyan o hayan debido incluirse cláusulas exorbitantes.
4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.
5. Los que se originen en actos políticos o de gobierno.
6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.
7. Los recursos extraordinarios contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de funciones propias del Estado.

**PARÁGRAFO.** Para los solos efectos de este Código, se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominación; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participación igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participación estatal igual o superior al 50%.

La sentencia del Consejo de Estado del 14 de mayo de 2014, radicado 41001-23-31-000 2003-01165-01(30724), Consejera ponente: Olga Melida Valle de la Hoz:

**"ACCION DE REPARACION DIRECTA - Por falla del servicio médico / FALLA DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL - En paciente embarazada / FALLA MEDICO GINECO OBSTETRICA - Por atención negligente y tardía en practicar cesárea / NEGLIGENCIA DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL - Causó la muerte de paciente en Clínica Federico Lleras de Neiva / DAÑO ANTIJURIDICO - Muerte de paciente al dilatar toma de ecografía y falta de registros clínicos del estado de la paciente demorando cirugía de cesárea.**

En este caso, de acuerdo con las pruebas allegadas, el daño se concretó en la muerte de la señora Mercedes Vargas Gutiérrez, quien luego de ingresar a la Clínica Federico Lleras el 20 de febrero de 1989 con sangrado vaginal y diagnóstico de placenta previa y feto muerto, debió ser sometida a una cesárea que se llevó a cabo el 23 de febrero de 1989, en la que presentó complicaciones, que concluyeron con su muerte el día 7 de junio de 1989.

**RECURSO DE APELACION - Competencia / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Conoce de procesos con vocación de doble instancia / VOCACION DE DOBLE INSTANCIA EN ACCION DE REPARACION DIRECTA - Cuando pretensión mayor supera cuantía dispuesta para tal efecto.**





El Artículo 129 del C.C.A., modificado por el artículo 37 de la ley 446 de 1998, referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, dice: "El Consejo de Estado en la sala contenciosa administrativa conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales (...)". Así, la Corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 19 de noviembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia. A la fecha de presentación del recurso, 7 de febrero de 2005, se encontraban vigentes las disposiciones contenidas en el Decreto 597 de 1988, según las cuales, para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en el año 1990 tuviera vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la cuantía exigida para el efecto, estimada en \$4'900.000. En este caso la cuantía se estima en \$ 36'282.950 por concepto de perjuicios morales.

**FUENTE FORMAL:** CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTICULO 129 / LEY 446 DE 1998 - ARTICULO 37 / DECRETO 597 DE 1998.

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Por falla del servicio médico asistencial / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA MEDICA - Evolución jurisprudencial.**

La responsabilidad por falla médica ha evolucionado a lo largo de los años, pasando desde el régimen de falla probada del servicio, la falla presunta del servicio, la carga dinámica de la prueba y en el año 2006, mediante Sentencia del 31 de agosto, volvió al régimen de falla probada, en razón de la complejidad de los temas médicos y la dificultad para las instituciones públicas en el ámbito probatorio, debido al tiempo que transcurre y la cantidad de casos que manejan. **NOTA DE RELATORIA:** Sobre la evolución jurisprudencial de la responsabilidad patrimonial del estado por falla médica, consultar sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp.15772, MP. Ruth Stella Correa

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Fundamento constitucional / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Se configura cuando los daños antijurídicos le sean imputables a la administración.**

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación.





**FUENTE FORMAL:** CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 90

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Elementos para su configuración / ELEMENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Son el daño antijurídico y su imputación a la administración / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO – Debe acreditarse nexo causal entre conducta y daño para establecer si las consecuencias son imputables al Estado.**

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración, en la cual debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado.

**DAÑO ANTIJURIDICO - Elementos para su configuración / ELEMENTO DEL DAÑO ANTIJURIDICO - La antijuricidad o el deber jurídico de no soportarlo / ELEMENTO DE DAÑO ANTIJURIDICO - Debe ser cierto o apreciable material y jurídicamente / ELEMENTO DEL DAÑO ANTIJURIDICO – Padecido por quien lo deprecia con interés legítimo.**

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre los elementos que constituyen el daño antijurídico, consultar sentencia de 1 de febrero de 2012, Exp. 21466, MP. Enrique Gil Botero.

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por falla médico asistencial / FALLA DEL SERVICIO MEDICO - Aplicable régimen de falla probada del servicio / REGIMEN DE FALLA PROBADA DEL SERVICIO - Implica probar existencia del daño y su imputación.**

Según la posición jurisprudencial que ha manejado la Corporación, los casos de falla médica son revisados actualmente bajo el régimen de la falla probada del servicio, en el cual no solo debe demostrarse la existencia de un daño, sino también su imputabilidad a la entidad que se demanda.

**PRUEBA DEL DAÑO - Carga de la prueba / CARGA PROBATORIA DEL DAÑO - Deber de las partes de acreditar supuestos de hecho / DAÑO ANTIJURIDICO - No puede afirmarse su existencia sin respaldo probatorio.**

Sobre la prueba del daño tenemos que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfático en afirmar "Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen...", no es suficiente que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, porque "el demandante no puede limitarse, si quiere sacar adelante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo probatorio". **NOTA DE RELATORIA:** Sobre la carga





probatoria del daño antijurídico, consultar sentencia de 1 de febrero de 2012, Exp. 21466, MP. Enrique Gil Botero.

**FUENTE FORMAL:** CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTICULO 177.

**FALLA DEL SERVICIO MEDICO - Grado suficiente de probabilidad / GRADO SUFICIENTE DE PROBABILIDAD - Es una regla probatoria que permite acreditar el vínculo causal mediante indicios / ACTUACION MEDICA - Debe configurar falla del servicio y ser causa eficiente del daño / DERECHO A LA REPARACION - Requiere de antijuridicidad del daño y que éste sea imputable a la administración / DERECHO A LA REPARACION - No procede cuando actuación médica no fue causa eficiente sino que constituyó un efecto la enfermedad del paciente.**

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre el derecho a la reparación por falla del servicio médico, consultar sentencia de 31 de agosto de 2006, Exp.15772, MP. Ruth Stella Correa Palacio.

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Por falla médica gineco obstétrica / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO MEDICO - Por muerte de paciente al acreditarse la deficiente prestación del servicio.**

Una vez estudiadas las pruebas aportadas al proceso, la Sala confirmará la responsabilidad por parte del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que la muerte de la señora Mercedes Vargas Gutiérrez, sobrevino por una serie de complicaciones derivadas de la deficiente prestación del servicio médico por parte del personal de la Clínica Federico Lleras.

**HISTORIA CLINICA - Acredita error de registro por médicos especialistas sobre evolución de paciente / NOTAS DE ENFERMERAS - No son las personas idóneas para registrar estado de salud del paciente / REGISTROS DE MEDICOS ESPECIALISTAS - No aparecieron en la historia clínica de la paciente.**

En el sub examine, se observa que no se registró correctamente la evolución de la paciente, omitiéndose el registro por parte de los médicos tratantes de los avances de la enfermedad, de las ordenes médicas impartidas, y se cuenta únicamente con notas de enfermería, que si bien ofrecen información acerca de la evolución de la señora Vargas, no son las enfermeras personas idóneas para registrar el estado de salud de la paciente, ya que éstas se ciñen a las órdenes impartidas por los médicos especialistas; anotaciones que se echan de menos en el documento aludido.





**HISTORIA CLINICA - Necesidad y requisitos para su elaboración / REQUISITOS DE HISTORIA CLINICA - Deben ser claras, fidedignas y completas / HISTORIA CLINICA - Permite garantizar el seguimiento, acierto del diagnóstico y atención de pacientes.**

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre la elaboración de historias clínicas frente a falla del servicio médico, consultar sentencia de 26 de mayo de 2011, Exp.20097, MP. Hernán Andrade Rincón.

**FALLA DEL SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL - Por deficiente prestación del servicio al no ordenar oportunamente práctica de ecografía / RETARDO PRACTICA DE ECOGRAFIA - Ordenada dos días después del diagnóstico retrasó procedimiento de cesárea.**

De la lectura de las ordenes médicas y las anotaciones de enfermería, se desprende que desde el día 20 de febrero de 1989 hubo un diagnóstico de placenta previa y que la paciente refirió ausencia de movimientos fetales, sin que se ordenara una ecografía hasta el día 22 de febrero, cuando habían transcurrido ya 2 días desde el diagnóstico inicial, y lo anterior retrasó la práctica de la cesárea hasta el día 23 de febrero.

**DICTAMEN PERICIAL - Acreditó retraso de atención a la paciente / RETRASO INJUSTIFICADO DE ATENCION A PACIENTE - Conllevó a no realizar el proceso de cesárea oportunamente / RETRASO DE ATENCION A PACIENTE - La ausencia de ecógrafo en la clínica no impedía realizar ecografía.**

Se permite determinar que efectivamente se presentó un retraso en la atención de la paciente, y no se siguieron las pautas de la norma de atención, que establecía la necesidad de desembarazar a la materna lo antes posible vía cesárea para evitar hemorragia vaginal y otras complicaciones, como efectivamente se presentaron. Para la Sala, no es de recibo el argumento de la ausencia de ecógrafo en la institución, pues se observa que el día 22 de febrero se ordenó la práctica de este examen y se trasladó a la paciente hasta el lugar donde se podía llevar a cabo el mismo; orden que bien pudo emitirse desde el día del ingreso de la señora Mercedes Vargas a la Clínica Federico Lleras -20 de febrero-, pero que debido a retrasos injustificados, se hizo sólo hasta el día 22.

**DERECHO A LA SALUD – Obligación al Estado de garantizar prestación oportuna y eficaz del servicio médico / DERECHO A LA SALUD – Se garantiza mediante procedimientos para restablecer la salud y la adopción de políticas públicas.**

El derecho a la Salud, consagrado en la Constitución Política, implica la obligación a cargo del Estado de garantizar la prestación de servicios médico asistenciales en la cantidad oportunidad y eficiencia requeridas, mediante los cuidados, intervenciones





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

y procedimientos necesarios para restablecer la salud, al igual que la implementación de políticas públicas en esta materia.

**VIOLACION DEL DERECHO A LA SALUD – Por dilación injustificada de prestación del servicio hospitalario / DILACION INJUSTIFICADA PRESTACION DEL SERVICIO HOSPITALARIO – Implica grave desconocimiento de elementos de obligación médica / ELEMENTOS DE OBLIGACION MEDICA – Integralidad, oportunidad e identidad / SERVICIO PUBLICO DE LA SALUD – Representa actividad esencial definida por constituyente primario.**

**NOTA DE RELATORIA:** Sobre la dilación injustificada de la prestación del servicio médico, consultar sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp.18524, MP. Enrique Gil Botero.

**DERECHO A LA SALUD – Noción / DERECHO A LA SALUD – Naturaleza dual / NATURALEZA DUAL DEL DERECHO A LA SALUD – Por ser derecho fundamental y servicio público esencial / SERVICIO PUBLICO DE LA SALUD – Implica garantía a todos los asociados a cargo del Estado / PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA SALUD - De universalidad, progresividad, eficiencia y solidaridad / VIOLACION A PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA SALUD – Debido a inexistencia de recursos para prestación del servicio y ausencia de plan de contingencia para suplirlas.**

De tiempo atrás se ha establecido que el derecho a la salud no solo tiene carácter de derecho fundamental sino que además es un servicio público esencial a cargo del Estado, razón por la cual debe garantizarse su protección efectiva a todos los asociados. (...) Se permite determinar que al existir una ausencia de los recursos que se ofrece para la atención de un paciente, y no contar con un plan de contingencia que permita suplir esas falencias de forma oportuna, se está incurriendo en una violación a los anteriores principios, razón por la cual, se configura la responsabilidad del Estado, y concurren los elementos que permiten imputarle a la entidad, la falla que conllevó a la muerte de la paciente Mercedes Vargas. **NOTA DE RELATORIA:** Sobre la noción, naturaleza dual y principios del derecho a la salud, consultar sentencia de 13 de mayo de 2008, T-544 de 2008 de la Corte Constitucional, MP. Jaime Córdoba Triviño

**RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - Configurada por muerte de paciente debido a negligencia de Clínica / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO - Por inadecuada elaboración de historia clínica que generó retrasos injustificados del servicio que causaron la muerte de la paciente.**





*Considera la Sala que la ausencia de una historia clínica adecuada, aunado a las conclusiones emanadas del dictamen pericial, y el estudio de la poca información con la que se cuenta en las notas de enfermería, materializan la responsabilidad de la entidad demandada, toda vez que se evidencia una atención negligente desde el ingreso de la paciente al servicio de urgencias, que conllevó a retrasos injustificados, los cuales concluyeron con su muerte.*

**LLAMADOS EN GARANTIA – Médicos de urgencias, gineco obstetra y anesthesióloga / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LLAMADOS EN GARANTIA - Debido a que médico de urgencias y anesthesióloga no estaban a cargo del tratamiento de víctima / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LLAMADO EN AGRANTIA – El daño acreditado no se produjo por acción u omisión de médico gineco obstetra.**

*Al proceso fueron vinculados los doctores Ramiro Roa Navarro, médico GinecoObstetra encargado de realizar la cirugía a la paciente, Alfonso Rosero Tafur, médico de urgencias y ayudante del doctor Roa en la cirugía; y Patricia Gutiérrez, quien fue la anesthesióloga. Respecto de la responsabilidad de los galenos, la Sala comparte el criterio del a quo para absolver a los doctores Patricia Gutiérrez y Alfonso Rosero Tafur, pues no es posible derivar responsabilidad de sus conductas, ya que estos no estaban a cargo del tratamiento de la señora Mercedes Vargas. Igualmente, para el caso del doctor Ramiro Roa Navarro, la Sala también considera pertinente absolverlo de los cargos que se le imputan, pues teniendo acreditado que el daño no se produjo por alguna acción u omisión de este, sino de la entidad, al no contar con los medios requeridos para prestar adecuadamente el servicio de salud.*

**INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES – Reconocidos a compañero permanente e hijas de la víctima por acreditar parentesco / DAÑO MORAL – Se presume sufrimiento de pariente cercano que causa dolor y angustia a su núcleo familiar / DAÑO MORAL – Su levedad o gravedad de las lesiones sufridas por afectado solo determinan el monto a indemnizar / PERJUICIOS MORALES – Se reconocen cien salarios mínimos a cada familiar.**

*Una vez demostrado el parentesco con los registros civiles y los testimonios allegados al proceso, esta Sub-Sección entiende que se encuentra demostrado el perjuicio moral sufrido por el señor Jesús Méndez Martínez, compañero permanente de la víctima; y las hijas de la pareja, en cuyos registros civiles de nacimiento se registran como padres la señora Mercedes Vargas y el señor Jesús Méndez Martínez. (...) Se modificará la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, numeral tercero, y se dispondrá la indemnización de perjuicios equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la presente sentencia, para cada uno de los demandantes.*





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Unidad tiene derecho*

**INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MORALES – Los reconocidos a compañero permanente fallecido se otorgan a favor de sucesión.**

*Dado que se advierte que el señor Jesús Méndez Martínez falleció durante el trámite del proceso, la indemnización que a él le correspondía, se otorgará a favor de su sucesión.*

**INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Juez ad quem confirma los reconocidos por juez ad quo con respectiva actualización.**

*Se procederá a confirmar los perjuicios materiales concedidos en primera instancia, y se actualizarán, con base en la fórmula aplicada por la Corporación para estos casos”.*

Además de lo enunciado, las demás normas que la jurisdicción estime aplicables al caso en concreto.

**JURAMENTO ESTIMATORIO**

Conforme el artículo 25 y 26 de la ley 1564 de 2012, estimo bajo la gravedad de juramento, la cuantía de este proceso asciende a la suma de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE (\$**785.945.004**).

Por los daños materiales e inmateriales ocasionados a:

**A favor de LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
Daño emergente	Lucro cesante consolidado	Lucro cesante futuro	Daño moral	Daño a la vida de relación	





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Usted tiene derecho*

<b>consolidado</b>					
\$8.291.544.	\$29.250.195	\$203.287.665	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$422.534.604</b>

**A favor de SOFIA NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
<b>Daño emergente consolidado</b>	<b>Lucro cesante consolidado</b>	<b>Lucro cesante futuro</b>	<b>Daño moral</b>	<b>Daño a la vida de relación</b>	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**A favor de STIVEN NARANJO GONZALEZ:**

Perjuicios patrimoniales			Perjuicios extra patrimoniales		Total
<b>Daño emergente consolidado</b>	<b>Lucro cesante consolidado</b>	<b>Lucro cesante futuro</b>	<b>Daño moral</b>	<b>Daño a la vida de relación</b>	
\$0.	\$0.	\$0.	\$90.852.600	\$90.852.600	<b>\$181.705.200</b>

**GRAN TOTAL ..... \$ 785.945.004**

**PRUEBAS**

Respetuosamente solicito al Señor Juez, se tengan, aprecien, decreten, practiquen y valoren como tales las siguientes:

**DOCUMENTALES:**





1. Cedula de ciudadanía de Luz Marina González Londoño.
2. Registro Civil de Nacimiento de Luz Marina González Londoño.
3. Registro Civil de Nacimiento de Elmer Naranjo Valencia.
4. Registro Civil de defunción de Elmer Naranjo Valencia.
5. Declaración, extrajuicio rendida ante notario del 13 de septiembre de 2019.
6. Registro civil de matrimonio.
7. Registro Civil de Nacimiento de Sofia Naranjo González.
8. Registro Civil de Nacimiento de Stiven Naranjo González.
9. ADRES de Elmer Naranjo Valencia.
10. Concepto Medico Historia Clínica del Medico Especialista Juan Carlos López Alzate.
11. Historia clínica del señor Elmer Naranjo Valencia desde el 28 de marzo de 2018 hasta su fallecimiento el 02 de septiembre de 2019, compuesto por diversidad de entidades de salud.
12. Fotocopia de acción de tutela del 10 de octubre de 2018.
13. Oficio 1881 del 16 de octubre de 2018 emitido por el juzgado Segundo Penal Municipal de Tuluá.
14. Sentencia No. 119 del 01 de noviembre de 2018 emitido por el juzgado Promiscuo Municipal de San Pedro.
15. Incidente de desacato de fecha 04 de marzo de 2019.
16. Acción de tutela del 08 de julio de 2019.
17. Sentencia No. 189 del 18 de julio de 2019 emitida por el juzgado primero civil municipal de Tuluá.
18. Apelación con radicado del 24 de julio a la sentencia de 2019 No. 189 del 18 de julio de 2019 emitida por el juzgado primero civil municipal de Tuluá.
19. Sentencia de segunda instancia No. 222 del 02 de agosto de 2019 emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tuluá.
20. Derecho de petición de Elmer Naranjo Valencia a COOMEVA EPS de fecha 08 de agosto de 2019.
21. Queja de Luz Marina González Londoño y Elmer Naranjo Valencia elevada a la Personería Municipal de Tuluá de fecha 12 de agosto de 2019.
22. Incidente de desacato de la sentencia de tutela No. 189 del 18 de julio de 2019, del 15 de agosto de 2019.
23. Recibos de gastos médicos (37).
24. Certificado de existencia y representación legal de COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA -COOMEVA-.
25. (39) fotografías contenidas en CD – ROM. Se deja constancia que las imágenes son fuertes y se anexan como medios de prueba por expresa solicitud de la señora Luz Marina González.





26. (18) videos contenidos en CD – ROM. Se deja constancia que las imágenes son fuertes y se anexan como medios de prueba por expresa solicitud de la señora Luz Marina González.
27. Acta de Audiencia realizada por la Procuraduría General de la Nación el día 25 de octubre de 2021.
28. Constancia de conciliación extrajudicial administrativo del proceso con Radicado Interno 2021-104.

### **TESTIMONIALES:**

#### **Interrogatorio de parte:**

Se sirva citar a su Despacho, con el propósito de que depongan sobre los hechos de esta demanda, como testimonio de parte a LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía #66.728.506, domiciliado y residenciado en el Municipio de Tuluá (V).

#### **Testimoniales:**

Además, con el fin de dar certeza al juez, acerca de las circunstancias y hechos segundo, tercero y vigésimo sexto enunciados en esta demanda y demás hechos que dieron origen a este proceso, especialmente el entorno familiar de la demandante, especialmente sus actividades laborales y la afectación a su vida laboral, doméstica y familiar, se ordene la práctica de prueba testimonial a:

**ALVARO GONZALEZ**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 7.547.909, domiciliado y residenciado en la calle 14 #22-02 Barrio Maracaibo de Tuluá.

**BERTHA LUCIA GONZALEZ**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 66.709.598, domiciliado y residenciado en la Calle 42a #25-12 de Tuluá. Correo electrónico: blgonzalez98@hotmail.com.

Y especialmente para que declaren sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que fundamentan la presente demanda, y específicamente acerca del deterioro en la salud del demandante y su incapacidad física permanente, su labor de obrero de zona rural, y la manera como, luego de la cirugía, la vida de los demandados se ha deteriorado.





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Justicia tiene derecho*

## PETICION ESPECIAL

Teniendo en cuenta, que:

No es posible contar con El Certificado de existencia y representación de la Clínica Nuestra Señora de los remedios de Cali Nit. 890301430, ruego muy amablemente al despacho que, al momento de admitir la demanda, ordene, al demandado, que al momento de contestar la demanda o hacerse parte en el proceso, aporte el certificado de existencia y representación.

Argumentos que respaldan esta petición especial:

**ARTÍCULO 82. REQUISITOS DE LA DEMANDA.** Salvo disposición en contrario, la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.

**ARTÍCULO 96. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.** La contestación de la demanda contendrá:

5. El lugar, la dirección física y de correo electrónico que tengan o estén obligados a llevar, donde el demandado, su representante o apoderado recibirán notificaciones personales.

A la contestación de la demanda deberá acompañarse el poder de quien la suscriba a nombre del demandado, la prueba de su existencia y representación, si a ello hubiere lugar, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante, o la manifestación de que no los tiene, y las pruebas que pretenda hacer valer.

**ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA.** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.





**Moisés**  
Agudelo Ayala  
Abogados  
*Justicia tiene derecho*

## CUANTIA Y COMPETENCIA

El Tribunal Contencioso Administrativo es competente por razón de la cuantía que estimo en más de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS M/CTE (\$**785.945.004**) y por razón del lugar donde se iniciaron los hechos u omisiones.

## ANEXOS

Acompaño los siguientes documentos:

1. Poderes debidamente conferido al suscrito.
2. Los documentos mencionados en el acápite de las pruebas.
3. Constancia de tramite conciliatorio extrajudicial administrativo

## NOTIFICACIONES

El Demandado:

- **COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A** NIT 805000427-1, representada legalmente por su gerente, o a quien haga las veces; puede ser notificada en la Carrera 100 No. 11-90 LOCAL 250 teléfono 5243080 de la Ciudad de Cali- Valle [juridico@coomeva.com.co](mailto:juridico@coomeva.com.co).
- **HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE** NIT 891.901.158, Puede ser notificada en el correo electrónico [notificacionesjudiciales@hospitaltomasuribe.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@hospitaltomasuribe.gov.co) , dirección física Calle 27 No. 38-02 Tuluá- Valle
- **FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA** NIT 8913800541, puede ser ubicado en la Carrera 8 No. 17-52 Buga- Valle, Correo Electrónico. [siau@fhsj.org](mailto:siau@fhsj.org)
- **CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS DE CALI** NIT 890301430, dirección Avenida 2 Norte No. 24-157 Barrio San Vicente, Cali- Valle puede ser notificado al correo electrónico [servicioalcliente@clinicadelosremedios.org](mailto:servicioalcliente@clinicadelosremedios.org)

La demandante:

- **LUZ MARINA GONZALEZ LONDOÑO** en la dirección Manzana 52 Casa 27 barrio Bosques de Maracaibo de Tuluá (Valle del Cauca). Teléfono: 316 4591769. No tiene correo electrónico.





El suscrito apoderado en la CRA 27 No. 27-24 OF. 402B TULUA (V) TEL: 2246939 Cel.: 310 505 12 79. Email: myabogados@hotmail.com.

MANIFESTACION ESPECIAL. Tal como lo ordena el decreto legislativo 806 de 2020, simultáneamente, estoy enviando copia de esta demanda, con sus anexos a los demandados

Atentamente,



**MOISES AGUDELO AYALA**